

PROCEDIMIENTO: Ordinario.

MATERIA: Relación laboral. Despido injustificado

DEMANDANTE: MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ

DEMANDADO: FISCO DE CHILE

RIT: 0 – 3477 - 2018

RUC: 18 – 4 – 0108652 - 4

Santiago, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos, considerando y teniendo presente:

PRIMERO: Demanda. Que, ha comparecido doña **MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ**, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad N° 10.221.109-K, domiciliada para estos efectos en Avenida Nueva Providencia N° 2155, Torre B, oficina N° 1012, comuna de Providencia, Santiago, quien deduce demanda de declaración de vínculo laboral, despido injustificado, nulidad del despido y cobro de prestaciones e indemnizaciones, en contra de **FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, de profesión abogada, cédula nacional de identidad N° 6.274.313-1, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1687, ciudad y comuna de Santiago, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que a continuación expone:



RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.

Inicio de la relación laboral

Ingresó a prestar servicios bajo régimen de subordinación y dependencia el día 19 de mayo del año 2014 para cumplir funciones profesionales en dependencias de la demandada, la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, bajo contrato a honorarios a suma alzada en la Subsecretaría de Hacienda.

El último convenio de prestación de servicios a honorarios por suma alzada celebrado con la Subsecretaría de Hacienda se suscribió el día 27 de diciembre de 2017 para entrar a regir el 1º de enero de 2018 y cuya vigencia terminaba el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, fue informada verbalmente de su desvinculación el día 20 de marzo de 2018, y se le señaló en aquella notificación que se había decidido su desvinculación, sin expresar causa alguna, y que ésta se haría efectiva desde el día 23 de marzo del año 2018.

En los 5 contratos que firmó con el Ministerio de Hacienda, representado por el Subsecretario de Hacienda, la relación laboral se pactó bajo una jornada de 44 horas semanales a realizarse en dependencias del Ministerio de Hacienda, y dicha jornada horaria era controlada mediante un sistema de registro tecnológico, tanto a su entrada como a su salida. Solo para ilustrar, tenía exigencia horaria y de cumplimiento de jornada, vale decir, cuando no podía asistir a trabajar debía justificar sus días mediante una licencia médica (no obstante que su empleador no pagaba cotizaciones de salud) y debía permanecer en el servicio durante la jornada diaria, existiendo, por lo tanto, una obligación de permanencia. Los contratos también establecían que el incumplimiento injustificado del horario -cuando no



se registraban las marcas en el reloj control- daban origen a descuentos en su ingreso.

Para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, la última remuneración ascendió a \$3.119.064 pesos.

Sus funciones como trabajadora de la Subsecretaría de Hacienda, al tenor de los denominados convenios de prestación de servicios a suma alzada suscritos los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, eran las siguientes:

- Elaborar minutas técnicas e insumos para ser utilizados en las distintas iniciativas lideradas por el Ministerio.

- Apoyar en el diseño de políticas públicas participando en la elaboración de informes, proyectos de ley y presentaciones, especialmente en materias relacionadas con sistemas previsionales, protección social, pobreza y focalización.

- Apoyar técnicamente en los requerimientos de comisiones o consejos que se relacionen con el Ministerio en materia de sistema de pensiones.

Así, es imperioso indicar que sus funciones se refieren a una sistematicidad continua y no a labores prestadas ocasionalmente, cumpliéndose todas ellas durante la jornada laboral en dependencias de la demandada y bajo la subordinación y dependencia de la Coordinadora de Políticas Sociales, doña Paula Benavides Salazar.

En plano factual, inclusive en el uso lingüístico, fue catalogada como trabajadora, haciéndose plenamente aplicable lo que disponen los artículos, 7 8 y 9 del Código del Trabajo, entre otras normas, y develándose, por tanto, una práctica normalizada y tolerada por el Estado que refiere a las más graves violaciones a la normativa laboral,



existiendo una precarización y un abandono de inclusive su propia calidad de trabajadora, simulándose una sistematicidad de contratos a honorarios, cuya esencia radica en la prestación de servicios específicos y transitorios, lo que no ocurrió en el caso de marras.

Respecto a la antigüedad laboral que mantenía con la demandada, ésta incluso fue reconocida expresamente por ella mediante un certificado emitido por la Subsecretaría de Hacienda de fecha 21 de marzo de 2018, el que indica lo siguiente:

“El Encargado de Gestión de personas de la Subsecretaría de Hacienda, CERTIFICA que la Sra(ita). MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ, cédula nacional de identidad N°10.221.109-K, se encuentra contratado en esta subsecretaría como PROFESIONAL desde el 19 de MAYO de 2014 a la fecha.”.

Del término de la relación laboral.

El Ministerio de Hacienda, al igual que otras dependencias de la Administración Pública, mantiene a centenares de empleados desarrollando funciones bajo la figura de “planta”, “contrata” y “a honorarios”. Los primeros son funcionarios de carácter permanente prestando servicios casi en idénticas condiciones que un trabajador regido por el Código del Trabajo. Asimismo, se encuentran quienes prestan servicios bajo la figura legal de la “contrata” y finalmente quienes prestan servicios bajo el régimen de “honorarios”, siendo estos últimos los trabajadores más precarizados del Estado.

Son cientos los trabajadores que desarrollan funciones bajo subordinación y dependencia a través la figura de un contrato de honorarios mediante la cual ha torcido su elemento esencial y formal, constituyéndose en un verdadero fraude a la ley que, en efecto, malamente admite, como en su caso, el desempeño de funciones habituales y permanentes durante cuatro años en dependencias de la



demandada, imponiéndosele obligaciones tales como cumplimiento de jornada laboral, justificación de ausencias mediante licencias médicas, solicitud de permisos cuando debía asistir a trámites personales, permanencia en el servicio, cumplimiento de metas, entre muchas otras obligaciones propiamente laborales.

Por ello, si bien en el plano meramente formal se celebró un acto denominado “contrato de honorarios” o “convenio de prestación de servicios”, la intención y finalidad real de la Subsecretaría (Ministerio) de Hacienda era disponer de los servicios de un trabajador a jornada completa y con todas las obligaciones intrínsecas a tal calidad.

En tales condiciones de precariedad laboral, le fue comunicado verbalmente el 20 de marzo de 2018, que estaba despedida, y que ésta desvinculación se haría efectiva desde el día 23 del mismo mes y año. En dicha oportunidad no se le señaló la causa del término de la relación laboral. Posteriormente, mediante un correo electrónico, que envié el 23 de marzo, manifestó su preocupación por la no existencia de documento o acto formal que respaldara su inasistencia a partir del lunes 26 de marzo. En respuesta a ese correo electrónico la encargada de la Unidad de Gestión de Personas del Ministerio de Hacienda, señora Jeannette Leocares, le señaló, también mediante correo electrónico, lo siguiente:

“Tal como se te informó en reunión del día 20 de marzo, tu contrato se da por finalizado el día 23 del mismo mes.

Se aplica lo dispuesto en la cláusula segunda del convenio firmado para el año 2018, el cual faculta al Ministerio a poner término anticipado al convenio, considerando además lo expuesto en la cláusula octava, la cual señala que por razones de necesidad o conveniencia el Ministerio se reserva el derecho a poner término anticipado al contrato, sin que la “Consultora” tenga derecho al pago de



indemnización alguna.

Bajo esta premisa, no se requiere de ninguna acción de tu parte, y no te preocupes, pues no quedarás en falta por no presentarte a trabajar a contar del día 26, dado que se pone termino el día 23 de marzo, con respecto al acto administrativo, es lo mismo se sube a una plataforma y cuando este tramitada te la puedo enviar”.

Finalmente, como no le hacían llegar “el acto administrativo” en que constaba su desvinculación, el 2 de mayo solicitó, mediante correo electrónico, que se le enviara. El 3 de mayo, la encargada de personal de Ministerio de Hacienda le respondió, por correo electrónico, adjuntándole copia del Decreto Exento RA N°289/112/2018, del 17 de abril de 2018, que establece término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada. En dicho documento se señalaba como fundamento del término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada que:

“...se fundamenta en una reestructuración de funciones dentro del Ministerio de Hacienda, en atención a que no existe una Coordinación de Estudios, en donde se desempeñaba la señorita Peña, por lo que sus servicios serán asumidos dentro de la Coordinación de Políticas Sociales, entre los diferentes asesores que se desempeñan en dicha área, tornándose innecesarios sus servicios...”.

Respecto al fundamento argüido en el señalado Decreto Exento RA N°289/112/2018, acerca del término anticipado de sus labores, indica que su jefatura era la Coordinadora de Políticas Sociales y su trabajo lo desempeñaba en esa Coordinación. La Coordinación Estudios fue subsumida por la Coordinación de Políticas Sociales cuando Paula Benavides asumió la jefatura de la Coordinación de Políticas Sociales. De lo anterior da cuenta, entre otros antecedentes, el organigrama del Ministerio de Hacienda así como la presentación



que preparó y realizó Paula Benavides sobre la Coordinación de Políticas Sociales en la que se le solicitó abordar los siguientes tópicos: Función del área, equipo, recursos, organización y metodología de trabajo; Logros y aprendizajes del período y último año; Desafíos futuros y planificación para los próximos meses.

Adicionalmente, hace presente que, en el fundamento del término anticipado de sus labores, establecido en el Decreto Exento RA N°289/112/2018, se señala que las funciones que realizaba serán asumidas por otros asesores de la Coordinación de Políticas Sociales con lo que se evidencia aún más que estas no correspondían a labores accidentales sino que a habituales del organismo.

Cabe hacer presente que evidentemente no se le pagaron las cotizaciones previsionales y de seguridad social ni menos las indemnizaciones correspondientes a todos los años en que prestó servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia. Señala que su ex empleadora se encuentra en mora desde el momento inmediatamente posterior al acto de contratación, puesto que jamás enteró cotizaciones.

Para los efectos de dar cumplimiento con el artículo 446 del Código del Trabajo, señala que se encuentra afiliada a AFP CUPRUM S.A., a la AFC y a la ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

EL DERECHO.

Legitimidad Activa

El Código del Trabajo señala en su artículo 1: *“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o*



instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial”.

Al respecto, y si bien la demandada es una persona jurídica de derecho público, no cumple con los requisitos establecidos en el citado artículo 1º para no participar del régimen establecido en el Código del Trabajo respecto a mi relación laboral, toda vez que ésta no se enmarca dentro de la ley o estatuto especial. En efecto, el Estatuto Administrativo regulado en la Ley N° 18.834 y sus modificaciones, normativa que de acuerdo a su artículo 1º rige *“las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa”* no es aplicable a los trabajadores a honorarios. De manera expresa lo señala en su artículo 11º: *“Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.*

Así, es efectivo que los funcionarios a honorarios, no obstante trabajar para el Fisco de Chile, están sujetos, al no tener normativa especial aplicable, a los dictados de la normativa común, contenida en el Código del Trabajo. Ratifica dicho sentido el inciso 3º del ya citado artículo 1º del Código del Trabajo. Salvo, por consiguiente, que en los hechos hubiese prestado servicios accidentales y específicos, cuestión que se niega tajantemente, debido a que su relación laboral fue continua por un lapso de cuatro años. Señala que la Subsecretaría de Hacienda le pagaba la remuneración con la misma periodicidad que establece el Código del Trabajo, esto es, por períodos no superiores a un mes.



Existencia de un contrato de trabajo: elementos constitutivos de la relación laboral:

De acuerdo a lo dispuesto por el Código del Trabajo, en su artículo 3º, letra b), se entiende por trabajador a *“toda persona natural, que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo”*.

Asimismo, el artículo 7º de este cuerpo legal caracteriza al contrato de trabajo como una convención, que se genera desde el momento en que existe una relación entre dos personas, en la que una se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación, y la otra a pagar por estos servicios. Así, el artículo que le sigue dispone que siempre que se den estas condiciones, se presume la existencia de un contrato de trabajo. En su caso, y pese al nombre de “contrato de honorarios” o “convenio de prestación de servicios” signado por la Subsecretaría de Hacienda –y tal como ocurrió en todos los años que trabajó para la demandada- en los hechos se encontraba bajo una relación de subordinación y dependencia donde prestaba servicios intelectuales para dicha Subsecretaría, recibiendo por ello una remuneración.

Reforzando lo anterior, el artículo 9 del Estatuto laboral establece que el contrato de trabajo es consensual, de lo que se desprende que para su existencia no es necesario que conste por escrito, o que cumpla con alguna formalidad extra, más allá de la convención antes señalada, vale decir, la verdadera intención de contratar.

Principio de supremacía de la realidad:

La normativa señalada se cimienta en uno de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, reconocido como el “Principio



de Primacía de la Realidad”, en virtud del cual se entiende que “*en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos*”. El principio se aplica de forma tal que la relación de trabajo depende, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en la que el trabajador se encuentre dentro de dicha relación. En este caso, y aplicando este principio, debe primar lo que sucedía en la realidad, es decir, debe presumirse la existencia de la relación laboral, en virtud de los indicios que señaló precedentemente, y que demuestran la existencia de una relación de dependencia y subordinación. De esta manera, son los supuestos fácticos de la relación entre trabajador y empleador los que hacen presumir la existencia de un contrato de trabajo, y no la verificación del mismo en un documento escrito signado como tal. Asimismo, la Dirección del Trabajo, en diversa jurisprudencia administrativa, entre ellas los ORD. N° 2376-65 de 06 de junio de 2005, 2688-151 de 19 de agosto de 2002 y 3257-89 de 29 de junio de 2005, enumera algunos indicios que pueden llevar a establecer que tras un supuesto fáctico se esconde una relación laboral, tales como: el cumplimiento de un horario de trabajo; la obligación de asistencia del trabajador; la continuidad de los servicios prestados; la obligación del trabajador a ceñirse y acatar instrucciones y controles establecidos por el empleador; la fiscalización del empleador en la ejecución de las funciones del trabajador; el derecho del empleador a dirigir al trabajador en la forma y oportunidad de la ejecución de sus labores, y la periodicidad en el pago de remuneraciones, entre otras. Todas aquellas se dan en el caso sublite.



Principio protector:

El principio protector tiene su raíz en que *“El Estado no pudo mantener la ficción de una igualdad entre las partes del contrato de trabajo, inexistente en el hecho, y procuró compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica que lo favoreciera”*.

Interpretando el principio protector, cabe concluir que se manifiesta nítidamente en la regla “in dubio pro-operario”. En tal caso, si se enuncian normativamente dos situaciones, el juez deberá escoger el más favorable al trabajador. Lo mismo ocurre a la hora de interpretar los hechos o ponderar la prueba. Su fundamento positivo está, entre otras normas, en el artículo 9° del Código del Trabajo, en el sentido de que a la falta de contrato escrito se presumirá legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador.

Del despido injustificado y ausencia de causal

Como ya fue relatado, fue cesada en sus funciones el 23 de marzo de 2018, sin que se le hayan pagado las respectivas indemnizaciones y prestaciones laborales a que tiene derecho.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, el trabajador cuyo contrato termine por uno o más de las causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo y que considere que la determinación del empleador es injusta, indebida o improcedente, o que no se ha invocado una causa legal, podrá recurrir ante el Juzgado competente, a fin de que el tribunal así lo determine.

Cabe tener presente lo señalado en el número 1) inciso 2° del artículo 454 del Código del Trabajo, el que dispone que: *“No obstante lo*



anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido”.

El artículo 162 del Código del Trabajo prescribe que: *“Si el contrato termina de acuerdo a los números 4, 5 ó 6 del artículo 159, o si el empleador le pusiere término por aplicación de una o más de las causales señaladas en el artículo 160, deberá comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domiciliado señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas y los hechos en que se funda”.*

Respecto a lo anterior, es del caso indicar que, en el caso de marras, la comunicación del despido no cumple con las mínimas exigencias de la normativa laboral vigente, máxime si se considera su impecable trayectoria en el Servicio. En efecto, el despido se basa en a argumentos que en definitiva se refieren a “necesidades del servicio”, no obstante que la fundamentación de la misma es la única forma de poder apreciar el criterio y proporcionalidad de la medida adoptada en relación con el efecto causado, esto es, el despido del que fue objeto.

En resumen, señala que la ausencia o falsedad de la causal transforma en improcedente e indebido el despido.

De la nulidad del despido

Del inciso 5° del artículo 162 del Código del Trabajo, se establece que si el empleador no hubiere efectuado el íntegro pago de las cotizaciones previsionales al momento del despido, este no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo, el que podrá convalidar con posterioridad, pero que en todo caso, de



conformidad al inciso 7 del artículo en comento, deberá pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período comprendido entre la fecha del despido y la fecha del envío de la referida comunicación de convalidación al trabajador.

De acuerdo al principio “in dubio pro operario” que corresponde a una regla de interpretación laboral, el vocablo despido que utiliza dicho artículo debe entenderse en su acepción más amplia, incluyendo tanto la acción del empleador como la del trabajador. Ello por cuanto si la sanción de nulidad del despido solo se configurara a favor del trabajador que resulta despedido por su empleador, este último podría postergar indefinidamente el pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales. En virtud de aquello, la jurisprudencia ha entendido que la nulidad del despido procede, inclusive, cuando sea una sentencia la que declara la existencia de la relación laboral.

PETICIONES CONCRETAS

Las indemnizaciones y prestaciones laborales que se demandan por el término de la relación laboral, más el recargo legal que establece el artículo 168 letra b) de un 50% por no invocarse causa legal, son las siguientes:

1. Que se declare la existencia de la relación laboral que la ligó con la Subsecretaría (Ministerio) de Hacienda.

2. Que se condene a la demandada al pago del periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año, por haberse comunicado el despido antes del vencimiento del plazo del respectivo contrato de trabajo, suma que asciende a \$28.799.355 pesos.-



3. Que se condene a la demandada al pago de la indemnización por años de servicios, los que en la especie ascienden a \$12.171.956 pesos.-

4. Que se condene a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del pre aviso, suma que en la especie asciende a \$3.119.064 pesos.-

5. Que se condene a la demandada al pago del feriado legal y proporcional, el que en la especie asciende a \$727.781 pesos.-

6. Que se condene a la demandada al pago del recargo que establece el artículo 168 del Código del Trabajo.

7. Que se aplique la sanción contemplada en el artículo 162 inciso 7, condenando a la demanda a pagar las remuneraciones mensuales y demás prestaciones que se devenguen desde la fecha de término de la relación laboral hasta la fecha de su convalidación, de acuerdo a los montos de las remuneraciones mensuales o por los montos o períodos que se determine.

8. Que, la demandada deberá ser condenada al pago íntegro de las cotizaciones adeudadas, debiendo oficiarse a los entes correspondientes para impetrar su pago.

9. Que, la demandada deberá ser condenada al pago de los reajustes e intereses de todas las sumas expresadas y determinables en el mismo porcentaje en que varíe el IPC, determinado por INE, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice, conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

10. Que se condene en costas a la demandada.

Por tanto, solicita tener por interpuesta la demanda en



procedimiento de aplicación general por declaración de vínculo laboral, despido injustificado, nulidad del despido, y cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales y previsionales adeudadas, en contra del **FISCO DE CHILE –SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, representado legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, ambos ya individualizados, todo esto para que se acoja la acción interpuesta, dando lugar a ella en todas sus partes y a todas las pretensiones expuestas y así:

1. Que se declare la existencia de la relación laboral que me ligó con la Subsecretaría (Ministerio) de Hacienda.

2. Que se condene a la demandada al pago del periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año, por haberse comunicado el despido antes del vencimiento del plazo del respectivo contrato de trabajo, suma que asciende a \$28.799.355 pesos.-

3. Que se condene a la demandada al pago de la indemnización por años de servicios, los que en la especie ascienden a \$12.171.956 pesos.-

4. Que se condene a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del pre aviso, suma que en la especie asciende a \$3.119.064 pesos.-

5. Que se condene a la demandada al pago del feriado legal y proporcional, el que en la especie asciende a \$727.781 pesos.-

6. Que se condene a la demandada al pago del recargo que establece el artículo 168 del Código del Trabajo.

7. Que se aplique la sanción contemplada en el artículo 162 inciso 7, condenando a la demanda a pagar las remuneraciones



mensuales y demás prestaciones que se devenguen desde la fecha de término de la relación laboral hasta la fecha de su convalidación, de acuerdo a los montos de las remuneraciones mensuales o por los montos o períodos que se determine.

8. Que, la demandada deberá ser condenada al pago íntegro de las cotizaciones adeudadas, debiendo oficiarse a los entes correspondientes para impetrar su pago.

9. Que, la demandada deberá ser condenada al pago de los reajustes e intereses de todas las sumas expresadas y determinables en el mismo porcentaje en que varíe el IPC, determinado por INE, entre el mes anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice, conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

10. Que se condene en costas a la demandada.

SEGUNDO: Contestación de la demanda. Que la demandada dentro del plazo legal, contestó la demanda, solicitando el rechazo de las mismas en base a las siguientes consideraciones:

EXCEPCIONES, ALEGACIONES y DEFENSAS

Excepción de incompetencia absoluta del tribunal en razón de la materia.

El Fisco de Chile, controvierte todos los hechos en que se funda la demanda, por cuanto no es efectivo que haya existido una relación laboral, ni vínculo de subordinación o dependencia, por la simple circunstancia que tal supuesto es improcedente en una relación de prestación de servicios entre una persona y un órgano de la Administración Pública. Los servicios que prestó el demandante corresponden al sistema de “contrato de honorarios”.



Por lo expresado, el Tribunal resulta ser incompetente, por la sola aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo, que indica cuáles materias son de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. Entre ellas destacan:

“a) Las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones o fallos arbitrales en materia laboral.

g) Todas aquellas materias que las leyes entreguen a los Juzgados de Letras con competencia laboral”.

La Sra. Peña se vinculó con la institución demandada, sobre la base de una relación de prestación de servicios bajo la modalidad de “contrato de honorarios a suma alzada”. En efecto, la demandante suscribió contratos de honorarios conforme a los respectivos decretos, el último de los cuales corresponde al Decreto TRA N° 289/20/2018/60/2018 de la Subsecretaría de Hacienda, tomado razón con fecha 30.01.2018.

Lo expuesto da cuenta que entre las partes no existió vínculo laboral alguno, razón por la cual no cabe hablar de cuestión suscitada entre un empleador y trabajador, ya que se trató de un vínculo sustentado en una prestación de servicios profesionales bajo la modalidad de honorarios a suma alzada.

Es así como la realidad precedente acerca de una vinculación administrativa se sustenta plenamente en los Contratos a Honorarios a Suma Alzada de la Subsecretaría de Hacienda, que aprueba la contratación a honorarios de la demandante sobre la base de suma alzada y en el marco jurídico que regula la relación de prestación de servicios en la cual se intenta sustentar la demanda.



En concreto, dicha contratación se ciñó expresa y taxativamente a las prescripciones de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que en su artículo 15 señala: *"El personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones"*.

Las normas estatutarias a las cuales se refiere el precepto corresponden a aquellas contenidas en el Estatuto Administrativo.

Conforme a lo anterior, el artículo 1° del Estatuto Administrativo, Ley 18.834, dispone que: *"las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas del presente Estatuto Administrativo"*, con lo que excluye la aplicación del Código del Trabajo a esta relación.

En el caso particular, la vinculación de una persona con el Estado o sus órganos y servicios, en base a honorarios, se encuentra expresamente regulada por el Estatuto Administrativo, que en su artículo 11, prescribe: *"Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente."*

Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto".

En definitiva, las prestaciones a honorarios, por expresa



disposición del artículo 11 del Estatuto Administrativo, se rigen en primer lugar por las reglas fijadas en el respectivo contrato y, en subsidio, por las normas del Código Civil, particularmente, las normas sobre arriendo de servicios inmateriales, contenidas en el Párrafo 9 del Título XXVI del libro IV.

Desconocer lo anterior, y afirmar que el contrato de honorarios a suma alzada no puede ser el estatuto especial que regula la relación entre la Sra. Peña y la Subsecretaría, significa desatender flagrantemente el artículo 1545 del Código Civil, conforme al cual el contrato es ley para las partes.

Sobre la materia, cabe agregar que la facultad de contratar que confiere el citado inciso 2°, se refiere a “*cometidos específicos*”, esto es, preestablecidos o determinados, y no exclusivos o excluyentes. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia, al término “*cometido*” le otorga el significado literal de “*comisión o encargo*”, sin relación alguna con los conceptos de exclusión, irrepetible o de estable, permanente e indispensable.

A mayor abundamiento, debe señalarse que la existencia de determinadas características laborales, como el horario, jornada de trabajo y eventual dependencia de una jefatura, no modifican la normativa legal pertinente, fundamentalmente el Estatuto Administrativo y el contrato de prestación de servicios a honorarios, vale decir los indicios de laboralidad no pueden significar la mutación de un contrato de prestación de servicios a uno de carácter laboral.

También los principios constitucionales sustentan la incompetencia absoluta alegada, al igual que los principios de orden legal ya esgrimidos precedentemente.



Cabe citar así, el principio de juridicidad, que sustenta la incompetencia del Tribunal para conocer de la demanda. Dicho principio implica entender la sujeción total e integral de todos los Órganos de Estado a la Constitución Política de la República y a las normas dictadas conforme a ella, entendiendo que bajo la expresión "Órganos del Estado" que el ordenamiento jurídico emplea, quedarían comprendidas tanto la Administración del Estado, coma el órgano jurisdiccional y el órgano legislativo, todos los cuales deben obligatoriamente actuar subordinados al Derecho, esto es, investidos legalmente, dentro de su competencia, en la forma prescrita por la ley y bajo prohibición de asumir otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido.

El principio de juridicidad se encuentra expresamente reconocido y consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado, y conforme a lo expuesto no existen normas que autoricen al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales, a someter a la demandada, a un régimen laboral regulado por el Código del Trabajo sino que, precisamente, se consagra lo contrario, pues las normas de Derecho Público aplicables a su situación impiden tal hipótesis.

Como consecuencia de las circunstancias señaladas, el tribunal carece de competencia para conocer de la demanda, cuyo conocimiento debe corresponder al juzgado civil pertinente.

En subsidio, excepción de falta de legitimación activa de la demandante y falta de legitimación pasiva de la parte demandada.

Tal como se ha expuesto precedentemente, los artículos 7, 8 y siguientes, y 159 y siguientes, todos del Código del Trabajo, se fundan en la existencia de una relación jurídico laboral regida por el código del



ramo, en que las partes se encuentran vinculadas en virtud de un contrato de trabajo, y no relacionadas en virtud de un contrato a honorarios, regulado por el artículo 11 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834) como ocurre en el presente caso, y que corresponde a aquellas relaciones no regidas por el código laboral, como lo plantea el artículo 1º inciso 2º del código pertinente.

De la misma manera, el artículo 420 en todas sus letras, se refiere a la competencia que se le otorga al juez del Trabajo para conocer las controversias surgidas entre “*trabajador*” y “*empleador*” “... *por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral;*” (letra a’).

De lo dicho, se colige sin duda alguna, que el procedimiento de aplicación general resulta pertinente para aquellas partes que se encuentran relacionadas por el denominado vínculo de subordinación y dependencia propio del Código del Trabajo, de acuerdo con las definiciones contenidas en las letras a) y b) del artículo 3 del Código del ramo, preceptos cuyo sentido y alcance deben entenderse a la luz de los arts. 20 y 21 del Código Civil, referido a las reglas de interpretación legal. De aquello dan cuenta las referencias normativas a la relación habida entre “*empleadores y trabajadores*” y la “*aplicación de los contratos individuales*” y la “*aplicación de las normas laborales*”.

Como consecuencia de lo anterior, el procedimiento de aplicación general se manifiesta como inaplicable respecto del organismo demandado, el que no tiene la calidad de “empleador” de la demandante, respecto a la cual no existe ni existió relación laboral



alguna regida por el Código del Trabajo.

Correlativamente, un particular como la actora, sometido a un estatuto especial (su contrato a honorarios a suma alzada), que además, no tiene el carácter de funcionario público, carece de legitimación activa para ejercer esta acción de nulidad y despido laboral.

Dicho en otros términos, la inexistencia de una relación laboral entre la actora y el Organismo demandado, obsta absolutamente a la aplicación de un procedimiento que se encuentra inspirado básicamente en la protección de derechos laborales, en el marco de una relación propia de un contrato individual de trabajo, calidad que no tiene en forma directa ni indirecta tanto la demandante como Subsecretaría - Fisco de Chile- demandada en autos.

En subsidio: controversia de los hechos

En cuanto al fondo del asunto controvertido, solicita tener presente que controvierte expresa y formalmente la versión de todos los hechos expuestos en la demanda, con excepción de aquellos que fueren reconocidos en forma expresa.

En particular, controvierte:

1.- Que entre las partes hubiese existido una relación laboral basada en un contrato de trabajo y regida por el Código Laboral y, por ende, la existencia de un presunto despido injustificado y la procedencia de las indemnizaciones y prestaciones que se reclaman.

2.- Que la cesación de los servicios profesionales se haya producido por despido y que este haya sido “injustificado” como pretende el demandante.

3.- Se controvierte todos y cada uno de los “supuestos indicios



de laboralidad” indicados en la demanda, toda vez que, y a contrario sensu, la Subsecretaría en la contratación del Sra. Peña ha dado estricto cumplimiento al artículo 11 de la Ley 18.834, ya que la demandante fue contratada precisamente en razón de su expertiz, dada su calidad de su título de ingeniería Comercial, con estudios y Magister en Políticas Públicas, para prestar servicios en la Subsecretaría y para el cumplimiento de los cometidos específicos, de que da cuenta su contrato a honorarios a suma alzada.

4.- Controvierte la naturaleza y monto de las remuneraciones que señala el demandante.

5.- Controvierte asimismo, que se adeuden a la demandante algunos de los conceptos y prestaciones reclamados en la demanda, tales como indemnización por años de servicio, el recargo sobre esta última, mes de aviso, feriado legal y cotizaciones previsionales.

6.- Que el Fisco de Chile se haya encontrado en la posibilidad cierta de poder pagar las prestaciones demandadas, conforme a la legislación vigente.

7.- La procedencia del pago de cotizaciones previsionales, dado que no existe título que faculte a la administración centralizada del Estado que coloque a esta última en la obligación de pagar.

8.- Procedencia de la sanción de nulidad del despido, que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, conocida como “Ley Bustos”, dada la ya señalada ausencia de título que habilite a la administración centralizada del Estado para pagar.

9.- Procedencia de la procedencia del pago por el período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año, por haberse comunicado el despido antes del vencimiento



del plazo originalmente acordado.

En razón de lo anterior no procede la acción ni las prestaciones reclamadas en el libelo, debiendo ser rechazado en todas sus partes con costas.

Inexistencia de un vínculo laboral entre la demandante y SUBSECRETARIA MINISTERIO HACIENDA. Existencia de contrato de prestación de servicios a honorarios.

Señala que la actora se vinculó con la Subsecretaría, sobre la base de una relación de prestación de servicios bajo la modalidad de honorarios a suma alzada, y no bajo la modalidad de un contrato de trabajo.

Así, se hace presente, que la demandante, como ella misma reconoce en la demanda, suscribió con la Subsecretaría sendos contratos de prestación de servicios a honorarios, todos los cuáles fueron tomados de razón por la Contraloría General de la República, o registrados en su caso, los cuales ahora pretende desconocer, ingresando a prestar servicios para la Subsecretaría el 19 de mayo de 2014, suscribiendo al efecto un Contrato de Honorarios a Suma Alzada, con vigencia hasta diciembre del mismo año y luego en virtud de la celebración de contratos a honorarios a suma alzada (4) se le informó que se terminaría anticipadamente su convenio el 23 de marzo pasado.

La demandante expone que supuestamente se le habría impuesto el desempeño de funciones habituales y permanentes durante cuatro años en dependencias de la Subsecretaría, imponiéndosele obligaciones tales como cumplimiento de jornada laboral, justificación de ausencias mediante licencias médicas,



solicitud de permisos cuando debía asistir a trámites personales, permanencia en el servicio, cumplimiento de metas, entre muchas otras obligaciones propiamente laborales. Por ello, si bien en el plano meramente formal se celebró un acto denominado “contrato de honorarios” o “convenio de prestación de servicios”, señala la demandante que la intención y finalidad real de la Subsecretaría (Ministerio) de Hacienda habría sido disponer de los servicios de un trabajador a jornada completa y con todas las obligaciones intrínsecas a tal calidad.

Lo anterior no es efectivo.

No es efectivo, tanto porque, la cláusula primera del convenio a honorarios celebrado entre la demandante y la Subsecretaría dispone expresamente, en lo que importa, que: *“El presente contrato es un contrato a honorarios y las labores se realizarán en las dependencias del Ministerio de Hacienda en una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de la siguiente manera: De lunes a viernes en el rango de horario de 08:00 a 20:00 horas. El control y registro se llevará a cabo a través de los procedimientos establecidos para todo el personal que trabaja en la Subsecretaría de Hacienda. Se deja establecido que el incumplimiento injustificado del horario, dará origen al descuento que corresponda”*.

Lo recientemente señalado no es más que la forma indicada por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en dictamen N° 43.355, de 2005 -entre otros-, que: *“competen a las jefaturas de los servicios públicos establecer los sistemas de control horario que estimen necesarios para verificar tanto las inasistencias como los atrasos en que incurra el personal de su dependencia*.

Asimismo y tratándose de las funciones desarrolladas por los médicos contratados a honorarios, la autoridad supervisará el cumplimiento de la jornada laboral que les impone el respectivo convenio, debiendo fijar para tal efecto un



mecanismo de control de asistencia obligatorio, que perfectamente podría ser el mismo que haya adoptado como permanente y regular para fiscalizar la asistencia de todos los trabajadores de la institución, si la prestación coincidiera con su horario normal de funcionamiento. (Aplica Dictámenes N°s. 62.826, de 2004 y 29.928, de 2005, entre otros, de este Organismo de Control)”.

Además, respecto del cumplimiento de metas, ello no es efectivo en caso alguno, habida cuenta que el personal a honorarios, como lo es la demandante de autos, no integra equipos de cumplimiento de convenio de desempeño colectivo y tampoco están sujetos a las metas de eficiencia institucional del artículo 9° de la Ley N° 20.212, que establece una asignación por desempeño para las Instituciones que tienen derecho a percibir la asignación establecida en el artículo 17 de la Ley N° 18.091, destinadas a incentivar el desempeño de funcionarios públicos, calidad de la que carece la señorita Peña Ramírez.

A efecto de establecer la naturaleza jurídica de la relación contractual que vinculó a la Subsecretaría con doña Margarita Peña Ramírez debe necesariamente revisarse las normas aplicables al efecto, a saber:

a) El artículo 1° de del Estatuto Administrativo contenido en la Ley N° 18.834, que establece que: *"las relaciones entre el estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularan por las normas del presente Estatuto Administrativo, con las excepciones que establece el artículo 21 de la ley 18.575".*

b) A su vez el artículo 11 de esta misma Ley N° 18.834, que prevé que: *"Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la*



institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrán contratar sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean títulos correspondientes a la especialidad que se requiera. Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales". "Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las reglas de este Estatuto".

En efecto, la Subsecretaría celebró contrato sobre la base de honorarios a suma alzada con la demandante en uso de las facultades que le confiere el artículo 11 del Estatuto Administrativo, antes señalado, y en los cuales se establecían con toda precisión lo siguiente:

- a.- Que se trata de un contrato a honorarios a suma alzada.
- b.- La finalidad del contrato.
- c.- Los cometidos específicos a realizar por la persona que celebró el convenio.
- d.- La declaración que los servicios se contrataban sobre la base de honorarios a suma alzada, pagaderos previa presentación de boletas de honorarios en tantas cuotas como señala el respectivo contrato.
- e.- El plazo de duración de los servicios.
- f.- La reserva de la facultad de ponerle término anticipado o inmediato al contrato, en cualquier momento y sin expresión de causa.

En particular, el convenio celebrado entre la Subsecretaría y doña Margarita Peña Ramírez el 27 de diciembre de 2017, dispone en su cláusula primera que: *"El presente contrato es un contrato a honorarios y las labores se realizarán en las dependencias del Ministerio de Hacienda en una jornada de 44 horas semanales, distribuidas de la siguiente manera: De lunes a*



PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO
SANTIAGO

viernes en el rango de horario de 08:00 a 20:00 horas. El control y registro se llevará a cabo a través de los procedimientos establecidos para todo el personal que trabaja en la Subsecretaría de Hacienda. Se deja establecido que el incumplimiento injustificado del horario, dará origen al descuento que corresponda.

Las partes dejan expresa constancia que “La Consultora” realizará las tareas para las cuales fue contratada, en forma independiente, sin reconocer vínculo de subordinación y dependencia, y sin tener carácter de empleada “del Ministerio”.

En su cláusula segunda establece que: “El presente convenio regirá a contar del 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018, ambas fechas inclusive, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de poner término anticipado al mismo en los términos contemplados en la cláusula octava del presente Convenio. Dicha vigencia estará supeditada a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente convenio”.

La cláusula séptima establece que: “En el ejercicio de sus funciones “La Consultora” deberá velar por la reserva y confidencialidad de la información, materias y documentación a las que tuviere acceso o tome conocimiento, así como también, a no utilizarla en beneficio propio o de terceros, mientras dicha información no sea de carácter público de acuerdo a la ley. “La Consultora” deberá dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información vigentes en el Ministerio.

En relación a la probidad administrativa, “La Consultora”, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en el Código de Ética, aprobado mediante Resolución Exenta N° 204 de 2016, del Ministerio de Hacienda.

El no cumplimiento de esta cláusula por “La Consultora” dará derecho a “el Ministerio” a poner término inmediato de este contrato, facultando a quien



corresponda, en este mismo acto, para perseguir las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar como consecuencia del incumplimiento”.

La cláusula octava del convenio dispone que: *“Por razones de necesidad o conveniencia, “el Ministerio” se reserva el derecho a poner término anticipado al presente convenio, sin que “La Consultora”, tenga derecho al pago de indemnización alguna. Las partes dejan constancia que en el evento que el presente contrato termine en forma anticipada, ya sea por renuncia voluntaria de “La Consultora”, por aplicación de lo dispuesto en la cláusula séptima del presente contrato, o por cualquier otra causa, “el Ministerio” solamente pagará a “La Consultora” por concepto de honorarios, la suma que corresponda hasta el último día efectivamente trabajado, proporcionalmente calculada en relación con el monto de la cuota mensual pactada y previa presentación y aprobación del informe mensual de actividades por la contraparte técnica”.*

Las cláusulas transcritas se repiten, en términos generales, de forma similar, en los convenios a honorarios celebrados entre la demandante y la Subsecretaría los años 2014, 2015, 2016 y 2017, todos debidamente tomados de razón por la Contraloría de la República, o registrados, en su caso, por el Ente Contralor.

En el presente caso, la demandante conforme al texto del contrato suscrito y a la aplicación práctica del mismo, fue contratada para cometidos específicos. A saber, de acuerdo a la cláusula primera del convenio:

- Elaborar minutas técnicas e insumos para ser utilizados en las distintas iniciativas lideradas por el Ministerio.
- Apoyar en el diseño de políticas públicas participando en la elaboración de informes, proyectos de ley y presentaciones, especialmente en materias relacionadas con sistemas previsionales, protección social, pobreza y focalización.
- Apoyar técnicamente en los requerimientos de comisiones o



consejos que se relacionen con el Ministerio en materia de sistema de pensiones.

De lo anterior se desprende que los contratos a honorarios que regularon los servicios de la actora, tenían el carácter de especiales y particulares, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 11 “*cometidos específicos*”, esto es, preestablecidos o determinados, y no excluyentes.

Así también puede advertirse, que las tareas no son permanentes, confirmando que se trata de cometidos específicos.

No hay vínculo regulado por el Código del Trabajo

La demandante cree ver en el vínculo que la unió al Estado una relación laboral bajo subordinación o dependencia, regida por el Código del Trabajo. Demás está decir que ello no es efectivo, por cuanto jamás ha existido relación laboral alguna entre la demandante y la Subsecretaría.

Debe considerarse que la demanda se encuentra dirigida en contra del FISCO – SUBSECRETARÍA DE HACIENDA, en su calidad de empleador, concepto legal definido en el artículo 3° a) del Código del Trabajo: “*la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales a materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo*”; mientras que dicha acción se encuentra deducida por el demandante, en su calidad de funcionario a honorarios y no de trabajador, ultimo concepto legal definido en la letra b) del mismo precepto: “*toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, con dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo*”.

Como consecuencia de lo anterior, la acción deducida se manifiesta como inaplicable respecto del Organismo demandado, el



que no tuvo y no tiene la calidad de empleador de la demandante, ni tampoco puede ser deducido por el actor, respecto a la cual no existen ni existió relación laboral alguna regida por el Código del Trabajo.

Dicho en otros términos, la inexistencia de una relación laboral entre la demandante y el ente demandado, obsta absolutamente a la aplicación de un procedimiento que se encuentra inspirado básicamente como cauce para dirigir pretensiones de origen laboral en contra del empleador, calidad que no tiene en forma directa ni indirecta el Servicio Público demandado respecto de la actora, que tampoco tiene la calidad de trabajadora.

Ahora bien, la demandante enumera las condiciones en que habría prestado sus servicios y los beneficios que se establecían en su contrato honorarios, pues pretende ver en ellos elementos característicos propios de un contrato de trabajo, que excluirían la posibilidad de existencia de un contrato de prestación de servicios a honorarios, que serían:

a) En cuanto al vínculo de subordinación y dependencia: La demandante no se encontraba sometida a vínculo de subordinación y dependencia en los términos establecidos en el Código del Trabajo. Ahora bien, ello no significa que no existiera una supervisión para verificar si daba cumplimiento a la labor que se le encomendó y así se estableció, por lo demás, en el mismo contrato el cual señala, en su cláusula primera, una serie de funciones que la Subsecretaría encomienda a la demandante, encargo que a su vez es aceptado por la misma.

A mayor abundamiento se hace presente que a diferencia de los funcionarios de planta y contrata de la Administración Pública, la



demandante nunca fue objeto de evaluación de desempeño, por lo que difícilmente podría argumentarse la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia, sólo una supervisión mínima para verificar el cumplimiento de las obligaciones que nacen de sus convenios de prestación de servicios a honorarios.

Acorde a lo anterior, debe señalarse, con énfasis, que la entrega de instructivos de trabajo y capacitación para el desarrollo de las funciones contratadas, obedece al deber del Órgano de cumplir con su cometido, optimizando el desarrollo de sus funciones, según lo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo cual implica velar por el correcto cumplimiento de las labores desarrolladas por las personas contratadas para estas funciones, no siendo un impedimento a ello que éstas se encuentren contratadas a honorarios. Así lo ha dispuesto el órgano contralor al señalar que: *“quienes se desempeñan como contratados a honorarios tienen el carácter de servidores estatales y desarrollan una función pública, por lo que la autoridad debe velar por el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, y correcta administración de los medios públicos, consagrados en los artículos 3° y 5°, de la ley N° 18.575, disponiendo las medidas necesarias para verificar la realización de las tareas que se detallen y encomienden a una persona en los respectivos pactos”* (Dictamen N° 181 de 2016 de la Contraloría General de la República), sin que ello pueda entenderse como indicios de laboralidad, al no existir subordinación ni dependencia en los términos del Código del Trabajo.

b) En cuanto al pago de una remuneración determinada: En el contexto de la relación contractual que existió entre el demandante y la Subsecretaría, la actora nunca recibió una “remuneración” tal como se concibe en la legislación laboral, sino que sus ingresos



correspondieron al honorario que se pactó al iniciarse la prestación de servicios, que, como se señaló, corresponde a una determinada suma alzada, tal como consta en las respectivas cláusulas de los Convenios suscritos entre las partes.

El contrato de la demandante establece en su cláusula tercera que la Subsecretaría se obliga a pagar, por concepto de honorarios y no a título de remuneración, como retribución a los servicios prestados un honorario a suma alzada equivalente a la cantidad bruta total de \$37.428.765 pesos.

El honorario mencionado será pagado en doce cuotas mensuales iguales y sucesivas de \$3.119.064 pesos brutos, correspondiente a los meses desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2018, pagaderas, a más tardar, dentro de los cinco días hábiles del mes siguiente al que se efectuó la prestación de servicios, contra entrega de la correspondiente boleta electrónica de honorarios (con retención de impuesto), una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.

Para el pago de cada cuota, será necesario que “La Consultora” haya presentado previamente el respectivo informe mensual de actividades que dará cuenta de las labores que realizó en cumplimiento de la cláusula primera del presente convenio y que deberá ser aprobado por la contraparte técnica a través de la firma del informe.

Es lo que se denomina un contrato a suma alzada, pues esta suma se será pagada en doce cuotas de mensuales, iguales y sucesivas de \$3.119.064 pesos brutos, siendo aceptada por la demandante esta forma de contratación y, a su vez, se benefició de la



devolución del correspondiente impuesto retenido.

c) En cuanto al reconocimiento de beneficios como licencias médicas y vacaciones: La circunstancia de que las partes, libremente y en ejercicio de la autonomía de la voluntad, establezcan beneficios para el prestador de servicios, no altera la naturaleza del vínculo existente entre las partes, que en este caso viene dado por la tarea específica entregada al actor en la ejecución de la tarea encomendada.

d) En cuanto al cumplimiento de horarios determinados: El contrato de prestación de servicios a honorarios suscrito por la demandante en su cláusula segunda que los servicios debían prestarse por un total de 44 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, en el horario indicado, sin sujeción ni control directo de Jefatura, toda vez que no existía una supervisión directa del contrato, sino que esta correspondía a la Subsecretaría.

En conclusión y según lo expresado precedentemente, durante todo el tiempo de duración del contrato de prestación de servicios, se hicieron aplicables para el demandante, las normas de la Ley N°18.834, por expresa aplicación del contrato de prestación de servicios. En efecto, en los contratos ad referendum sobre la base de honorarios a suma alzada celebrados entre las partes, en uso de las facultades que le confiere el artículo 11 del Estatuto Administrativo, se estableció con toda precisión lo siguiente:

- 1.- Que se trata de un contrato a honorarios a suma alzada.
2. - La finalidad del contrato.
- 3.- Los cometidos específicos a realizar por el demandante.
- 4.- La declaración que los servicios se contrataban sobre la base



de honorarios a suma alzada, pagaderos previa presentación de boletas de honorarios en tantas cuotas como señala cada convenio.

5. - El plazo de duración de los servicios.

En definitiva, la Sra. Peña en su demanda, ha desconocido la naturaleza misma de los principios que informaron su relación con el Estado, por cuanto nunca existió el vínculo de subordinación y dependencia que pretende, el que no es aplicable a las relaciones entre el Estado y su personal, en razón que dichas relaciones se encuentran sujetas a las disposiciones del Estatuto Administrativo que hace inaplicables las normas laborales.

El término de los servicios a honorarios de la actora no obedeció a un despido injustificado.

La demandante aduce un “despido injustificado”, y que como consecuencia de lo anterior, que su parte sea condenada a pagar todas aquellas prestaciones que menciona.

Al respecto, es preciso señalar que la relación sub-lite no concluyó por efecto de un “despido”, sino que al ejercicio de la facultad convenida con la actora en el contrato de prestación de servicios en su cláusula segunda y octava, por las cuales se faculta a la subsecretaría a poner término anticipado a dicho convenio, según razones de necesidad o simple conveniencia.

De esa forma, mediante el Decreto Exento RA N° 289/112/2018, de 17 de abril de 2018, que estableció el término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada.

Sin perjuicio de lo anterior, que ya es justificación suficiente para el término de la relación contractual a honorarios que vinculaba a esta demandada para con la Sra. Peña, esa decisión contenía una



fundamentación expuesta en la resolución ya singularizada para poner término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada: “[...] lo anterior se fundamenta en una reestructuración de funciones dentro del Ministerio de Hacienda, en atención a que no existe una Coordinación de Estudios, en donde se desempeñaba la señorita Peña, por lo que sus servicios serán asumidos dentro de la Coordinación de Políticas Sociales, entre los diferentes asesores que se desempeñan en dicha área, tornándose innecesarios sus servicios, junto con que de mantenerlos se incrementaría el presupuesto de esta cartera, lo que no guarda relación con el proceso de racionalización institucional y de optimización de los recursos públicos, así determinado e informado por el Jefe de Servicio”.

Así son dos los fundamentos los que se señalan, en primer término, el Área de Coordinación de Estudios en donde se desempeñaba la demandante, fue objeto de una reestructuración, pasando esta Área a integrar la Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio, produciéndose el término del área dónde se desempeñaba la demandante.

Luego, hay un fundamento del término anticipado de este convenio de prestación de servicios a honorarios, que la demandante omite en su demanda, cual es que, de mantener sus servicios, se afectaría la racionalización institucional y la optimización de los recursos públicos. En efecto, se advierte que la demandante no incluye en su demanda la segunda parte del considerativo, dado que en su libelo sólo cita hasta la frase “*tornándose innecesarios sus servicios [...]*”, dejando de lado que la determinación del término anticipado de sus servicios a honorarios, además de resultar de la supresión de Área en que prestaba sus servicios, deviene en un impacto presupuestario, considerando el monto comprometido para el año 2018 por sus servicios (cantidad bruta total de \$37.428.765



pesos.)

Por otra parte, la demandante indica que, al establecerse en el fundamento del acto que puso término a su vínculo a honorarios con la Subsecretaría, que sus servicios *“serán asumidos dentro de la Coordinación de Políticas Sociales, entre los diferentes asesores que se desempeñan en dicha área”* evidenciaría que éstas no correspondían a labores accidentales, sino que a habituales del organismo.

Lo anterior no tiene sustento, puesto que lo que expresa la causal es que las tareas que constituyen cometidos específicos asignadas a las actividades que desarrollaba la demandante serán cumplidas, en los mismos términos, esto es, de manera específica, por los profesionales que integran la Coordinación de Políticas Sociales en la actualidad. Cabe recordar que el Área en particular en que se requerían los servicios de la señorita Peña Ramírez desapareció, siendo subsumida por la Coordinación antes citada, la cual a la fecha está compuesta por una Coordinadora y tres asesores de políticas sociales, estando una de ellas contratada a mitad de jornada. No existe a la fecha una Asesora de Estudios, como fue contratada la demandante, tal como reza cada uno de los convenios a honorarios que suscribió con la Subsecretaría.

En cuanto a la comunicación del término anticipado del contrato, se verificó verbalmente el 20 de marzo de 2018, como ejercicio de buenas prácticas, indicándosele en dicha oportunidad, por el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Hacienda y por la Coordinadora Legal y Administrativa, los motivos del término de su prestación de servicios (los mismos que se consignaron en el Decreto Exento RA N°



289/112/2018, de 17 de abril de 2018, antes indicado), explicándole presencialmente ante la demandante la decisión adoptada por el Subsecretario de Hacienda, en donde se le preguntó si tenía alguna duda, comentario o sugerencia al respecto, a lo que la demandante, dijo entender la decisión, indicándosele que esta desvinculación se haría efectiva desde el día 23 del mismo mes y año.

Con posterioridad, la demandada se comunicó vía correo electrónico de fecha 22 de marzo de 2018, con la Coordinadora Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda, doña Josefina Soto Larreátegui, a objeto de solicitar que la desvinculación se hiciera efectiva a partir del 1 de abril. En concreto indicó: *“cuando el martes me comunicaron que sería desvinculada y que tenía que venir hasta este viernes no se me ocurrió preguntarte si es posible que la desvinculación se haga efectiva a partir del 1 de abril. Me quedan 5 días de vacaciones que podría tomar para completar el mes y que mi remuneración no se vea mermada. También aprovecho de preguntarte quién firmará mi informe de actividades ya que me gustaría dejarlo entregado”*.

Lo anterior le fue respondido vía telefónica y luego, mediante correo electrónico de la Encargada (S) de la Unidad de Gestión de Personas de la Subsecretaría, doña Jeannette Leocares Espinoza, posteriormente, el 3 de mayo, se le remitió copia del Decreto Exento RA N° 289/112/2018, del 17 de abril de 2018, que establece término anticipado de convenio a honorarios a suma alzada.

Lo anterior permite establecer que el término del contrato no obedece a un "despido" con falta de claridad de los hechos y causales como señala la parte demandante. Es así que la forma de terminación del vínculo existente entre las partes obedece, sin lugar a dudas, a la regulación propia de los contratos a honorarios y no al sistema



establecido en el Código del Trabajo; en el caso de marras por término del plazo de vigencia dispuesto en estos términos en del contrato y de cuyo acto fue debidamente notificado, según reconoce la propia demandante.

Teoría del acto propio: la existencia de contrato a honorarios.

La teoría de los actos propios se fundamenta en la buena fe que debe existir entre las partes de toda relación contractual, dentro de la cual se incluye, naturalmente, la prestación a honorarios objeto de esta Litis.

Sin duda, la contraria vulnera un claro principio general del derecho; la interdicción del “*venire contra factum proprium non valet*”, o doctrina de los actos propios que proclama la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos, que como bien se sabe, constituye un límite al ejercicio de los derechos subjetivos, como expresión de la buena fe. En virtud del principio en comento, la contraria “*debe mantener un estándar de coherencia con su comportamiento (...) no puede hacer valer unas pretensiones que resulten contrarias al sentido objetivo de su comportamiento anterior*”.

Finalmente, el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho y ese acto contradictorio provoca la inadmisibilidad de la pretensión cuando el sujeto pasivo ha modificado su situación por la confianza que ha despertado en él la conducta vinculante.

En este sentido, la legislación laboral no puede considerarse aislada del ordenamiento jurídico general, ni menos, el principio de buena fe. En consecuencia, el juez laboral no puede desatender la voluntad de las partes que han decidido libremente no vincularse



laboralmente.

En virtud de lo anterior, la actora celebró diversos contratos de prestación de servicios a honorarios con la Subsecretaría, desde el año 2014, sin jamás manifestar de forma alguna su disconformidad con esa forma de contratación.

De ello se desprende su voluntad definida y persistente de mantener en el tiempo el mismo tipo de vinculación, sumado a su pasividad y silencio en orden a ejercer algún tipo de reclamo, situación que se extendió por varios meses, suscitando confianza en su contraparte y cuestionándose sólo al momento de terminar la relación con la Subsecretaría demandada en autos. Dicho comportamiento deja en evidencia un atentado a la buena fe.

Por lo anterior, se afirma con rotundo acento que nadie puede aprovecharse de su propia conducta, erosionando principios básicos de equidad al intentar borrar y desconocer unilateralmente después de años lo que se ha desarrollado y aceptado por largo tiempo, recibiendo los correspondientes e importantes beneficios por ello, ya que en ninguna parte del libelo de demanda se aduce a que durante el tiempo que se mantuvo vigente la relación civil entre las partes no se le hayan pagado oportunamente las prestaciones de carácter económico a las que tenía derecho, resultando además un hecho cierto e indiscutido que durante todo el lapso de tiempo se extendieron las correspondientes boletas de honorarios. En estos casos, la extensión de dichas boletas importa un claro indicio de aceptación, reiterada y mantenida en el tiempo, de las condiciones de contratación.

En el caso de autos, no puede la demandante pretender que podría verse en la indefensión por el término del contrato a honorarios,



ello por cuanto al ser funcionario a honorarios, asumió y aceptó la naturaleza jurídica del vínculo que lo ligaba con la institución a sabiendas de dicha naturaleza desde que se materializó la contratación a honorarios y, posteriormente, durante el tiempo en que ha servido en el respectivo cargo.

Legalidad competencial y presupuestaria.

La aplicación del Código del Trabajo resulta, además, incompatible con la Legalidad Presupuestaria. No debe olvidarse que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de acuerdo a lo que se denomina Legalidad Dual.

Por una parte, están las normas que fijan qué es lo que el órgano debe hacer y cómo hacerlo (legalidad competencial) y, por la otra, están las normas que destinan los recursos financieros para llevar a cabo las funciones encomendadas (legalidad presupuestaria).

El juzgamiento del actuar del órgano nunca puede hacerse sin tener presente esta dualidad a que hace referencia. Para ello es, preciso considerar y tener presente el artículo 4 inciso 2º y 9 inciso 3º del D.L. N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado; en relación con los artículos 1º de las Leyes de Presupuesto para los años respectivos, en la partida y glosa correspondiente.

El artículo 4º del D.L. N° 1263 establece y consagra el denominado principio de Legalidad del Gasto. Dicho artículo dispone: *“Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector Público”.*

Lo anterior, significa que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa (Ley Anual de Presupuestos) y que



no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso. Los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo.

También, debe tenerse presente el inciso 3° del artículo 9° del mismo D.L. N° 1263, con arreglo al cual: *“En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 se deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad”*.

El principio de Legalidad del Gasto es de tanta importancia y trascendencia, que el legislador incluso ha previsto un tipo Penal especial para el caso de infracción consciente y deliberada.

En lo que respecta específicamente a la Subsecretaría y en el caso de autos existía una disponibilidad presupuestaria por la Ley de Presupuestos del Sector Público, que faculta al ente público para suscribir convenios con personas naturales como Honorarios a Suma Alzada, con cargo a los cuales se podía contratar personal a honorarios.

La descripción que antecede se repite invariablemente en todas las leyes de presupuesto indicadas y, como se ve, en ninguna de ellas se autoriza o permite la contratación sobre la base de un contrato regido por el Código del Trabajo, lo que desde luego debe ser considerado y respetado, sin poder establecer, mediante sentencia, la existencia de un contrato de trabajo para el presente caso, porque ello importaría dejar estas normas sin aplicación, estableciendo artificialmente que en el periodo sub-lite hubo una relación laboral que legalmente jamás pudo configurarse, obligando al Fisco a pagar



indemnizaciones y prestaciones que se habrían devengado en ese mismo periodo, pese a que jurídicamente era imposible que aquello ocurriera, porque no existía norma que autorice la formación del pretendido vínculo laboral.

Lo anterior determina que la contratación a honorarios o a contrata o en cualquier otra modalidad no responde a una decisión que el Jefe Superior del organismo pueda adoptar, sino que tiene que necesariamente ajustarse y ceñirse de manera estricta a las respectivas partidas aprobadas en la ley de presupuesto las cuales condicionan el monto total del recurso financiero que puede destinarse a cada una de las formas de contratación que, a su turno, las normas competenciales han definido.

Los contratos honorarios suscritos entre la demandante y la Administración constituyeron un estatuto especial que, en las materias en ellos consagradas, rigió en forma íntegra las relaciones entre las partes, quienes conocían, querían y aceptaban dicho estatuto como el que reglaba completamente su vinculación.

Durante el tiempo que el actor sirvió en la Administración su relación se rigió por convenios a honorarios a suma alzada, por lo que no le asistía al Fisco de Chile, aparte de la retención y pago del impuesto respectivo, la obligación de retener y enterar cotización alguna de seguridad social y de salud en los organismos previsionales.

En lo relativo a este punto es importante tener presente lo señalado por la Contraloría General de la República en innumerables Dictámenes, según los cuales, los expertos contratados bajo base de honorarios, no invisten la calidad de funcionarios públicos y sus derechos y obligaciones son los establecidos en el respectivo contrato;



no rigen a su respecto las disposiciones del Estatuto Administrativo ni las del Código del Trabajo, y por lo mismo, es resulta improcedente que el Fisco haga pago de cotización de seguridad social alguna.

El pretender lo contrario, esto es, que al Fisco de Chile le correspondía el retener, declarar y pagar cotizaciones previsionales y de salud a las personas que se desempeñan bajo el vínculo a honorarios en la Administración del Estado, lleva aparejada una ilegalidad, violentando la supremacía Constitucional, contemplada en el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 19.880. Dichas normas establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (para el caso concreto, el artículo 11 del Estatuto Administrativo y demás normas de Derecho Público Administrativo aplicables) y deben desarrollar sus funciones dentro de su competencia.

Sobre el particular, y un mejor análisis, no debe olvidarse que los órganos del Estado desempeñan sus funciones de acuerdo a lo que se denomina Legalidad Dual.

Por una parte, están las normas que fijan qué es lo que el órgano debe hacer y cómo hacerlo (legalidad competencial) y, por la otra, están las normas que destinan los recursos financieros para llevar a cabo las funciones encomendadas (legalidad presupuestaria).

El juzgamiento del actuar del órgano nunca puede hacerse sin tener presente esta dualidad a que hace referencia.

De esta manera, una sentencia en que se condene al Fisco al pago de cotizaciones, que no podría legalmente haber retenido ni pagado vulnera esa legalidad dual.



Esta transgresión es la que precisamente ocurre cuando se condena al Fisco al pago cotizaciones de seguridad social en los organismos previsionales respecto de trabajadores que han presentado servicios a honorarios al amparo del artículo 11 del Estatuto Administrativo.

En efecto, en materia de administración de haberes públicos y como expresión del principio de legalidad, se debe observar el principio de legalidad del gasto público.

Luego si se dispone que el Fisco pague cotizaciones previsionales por un periodo en que no correspondía su entero por no existir relación laboral, y por ende, no había norma que habilitaría a realizar dicho desembolso, se contravienen no solo las normas que rigen la legalidad competencial sino que particularmente las normas sobre legalidad presupuestaria, contenidas el artículo 100 de la Constitución que dice: *“Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago.”*

La sentencia al hacerlo se infringiría lo señalado tanto el inciso 2° del artículo 4 y como en el inciso 3° del artículo 9, ambos del D.L. N° 1263 sobre Administración Financiera del Estado.

El artículo 4° del D.L. N° 1263 establece y consagra el denominado principio de Legalidad del Gasto, al disponer: *“Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional.”*



Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector Público”.

Lo anterior, significa que no puede haber erogación o gasto público sin habilitación legal previa y que no se puede efectuar cualquier tipo de desembolso.

Los únicos válidamente ejecutables son aquellos descritos en la tipología del clasificador presupuestario respectivo y que no se verifica respecto del pago de cotizaciones de seguridad social ni de salud para personas que laboran en la Administración bajo una prestación de servicios a honorarios.

En este sentido, la sentencia que condene al Fisco al pago de cotizaciones previsionales respecto de una persona que prestaba servicios al Fisco, también transgrede lo señalado en el inciso 3° del artículo 9° del mismo D.L. N° 1263, que señala: *“En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 se deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal. Para estos efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes contemplen esta calidad”.*

De esta manera y como puede apreciarse, mientras subsistió la relación bajo honorarios a suma alzada, el Fisco de Chile se encontraba fáctica y jurídicamente imposibilitado para cumplir con lo señalado en el artículo 58 del Código del Trabajo, que ordena al empleador deducir de las remuneraciones las cotizaciones de seguridad social.

El Fisco, durante la vigencia de la relación convencional con el actor, carecía de un título para retener y pagar en las instituciones de seguridad social las cotizaciones que señala aquella norma.



Lo anterior lleva a concluir que sólo por norma legal expresa un servicio público puede contratar personal al amparo del derecho laboral común, y si se realizara ello, sin la existencia de una ley previa, se incurre en un ilícito penal.

Para el caso de marras, nunca existió norma que autorizare o permitiese la contratación sobre la base de un contrato regido por el Código del Trabajo, por lo que nunca existió obligación de entero de cotizaciones en los organismos de seguridad social.

Antes de la presentación de la demanda que originó este juicio no se había siquiera cuestionado o discutido la existencia de una relación normada por el Código del Trabajo, y, por ende, no existía habilitación para el pago de cotizaciones previsionales.

Improcedencia de declarar la existencia de una relación laboral para casos en que en la contratación a honorarios no se cumplan las condiciones legales

En subsidio de lo anteriormente señalado, y para el improbable evento que se considere que en el caso en estudio la situación fáctica en que el actor prestó servicios para el demandado no se ajustaba a los términos del artículo 11 del Estatuto Administrativo, se estaría en presencia de un acto ilegal de la administración cuya sanción sería la nulidad del contrato a honorarios, mas no su transformación en un contrato de trabajo.

El ordenamiento jurídico no contempla como sanción para los actos de la Administración que no cumplan con los requisitos legales la transformación del acto en uno de distinta naturaleza.

De modo que si se estableciera que las partes en la contratación de la actora no se sometieron a las condiciones de accidentabilidad y



no habitualidad de los servicios o de cometidos específicos que se contempla en el artículo 11 del Estatuto Administrativo, lo que existiría sería un actuar no ajustado a derecho tornando ilegal el acto administrativo que aprobó el contrato, pero no cabría ni podría alterarse la calificación judicial del contrato a honorarios transformándolo en un contrato de trabajo.

Si se estimara que este organismo no actuó conforme a derecho en la contratación de la demandante no puede generarse otro acto jurídico distinto, puesto que no existe norma legal alguna que habilite a la conversión del convenio a honorarios regido por el Estatuto Administrativo en un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo o en otro acto de naturaleza jurídica diferente.

Además, debe considerarse que aún de admitirse la conversión el acto ineficaz en el ámbito del derecho público, sería necesario que ese acto se transformara en un acto eficaz o legal. Sin embargo, debe recordarse que el ordenamiento jurídico no autoriza a la Administración a contratar personal bajo la modalidad de un contrato de trabajo regido por el código del ramo, salvo en situaciones excepcionales y autorizadas por ley que no corresponden a este caso.

Por consiguiente, no es factible que el tribunal, a través del mecanismo como es la conversión del acto jurídico nulo se proceda a calificar ese acto como un contrato de trabajo, puesto que ello importaría generar un nuevo acto nulo, ya que el sistema legal no contempla que la Administración pueda contratar personal bajo la figura de un contrato de trabajo.

De esta manera, no resulta posible que una supuesta irregularidad se pretenda solucionar cometiendo una irregularidad de



la misma entidad.

Diferencia de régimen tributario y de pagos previsionales existente entre un vínculo a honorarios (de naturaleza civil) y otro propiamente laboral, regido por el Código del Trabajo.

Relacionado con la litis propuesta por la demandante, en el ámbito tributario, tratándose de una relación de prestación de servicios a honorarios, conforme lo expresado en el artículo 74 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, las personas jurídicas se encuentran obligadas a efectuar una retención de honorarios con una tasa provisional del 10% y enterarlo en arcas fiscales. Para tales efectos, el prestador de servicios tiene la obligación de emitir una boleta de honorarios a la entidad contratante, consignando el valor bruto a percibir y el monto a retener; mientras que, tratándose de una relación laboral regida por el Código del Trabajo, existe por parte del empleador la obligación tributaria de retener por concepto de impuesto único de segunda categoría.

A las remuneraciones se les aplica un impuesto porcentual de acuerdo a los tramos de rentas señalados en el artículo 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Las remuneraciones afectas al Impuesto Único constituyen la renta imponible que se determina deduciendo de las remuneraciones brutas, las cotizaciones previsionales y de salud de cargo del trabajador, que le hayan sido retenidas por los respectivos empleadores, por lo que, de acogerse la demanda, se produce una alteración del referido régimen tributario, pudiendo existir diferencias a favor o en contra del Fisco.

Por su parte, y en lo que concierne al pago de cotizaciones



previsionales para prestadores de servicios, conviene tener presente que a partir del año 2012 todas las personas que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios tienen la obligación personal (no traspasable a la persona o entidad a quien prestan sus servicios) de realizar cotizaciones previsionales para pensiones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con la posibilidad de eximirse anualmente de dicha obligación por las rentas de honorarios recibidas hasta el año 2017, exención que opera a solicitud expresa del prestador de servicios.

De esta forma, es manifiesto que están obligados a cotizar todas aquellas personas que:

- Perciban honorarios por actividades independientes;
- Perciban rentas por Boletas de Honorarios;
- Perciban rentas por Boletas de Prestación de Servicios de Terceros;

- Perciban rentas por Participaciones de Sociedad de Profesionales; estando únicamente están excluidos de la obligación de cotizar aquellas personas que:

- Estén afiliados a Instituciones del Sistema antiguo de Previsión: Capredena, Dipreca e IPS.

- Mujeres que tengan 50 años o más y hombres que tengan 55 años o más, al 1 de enero de 2012.

- Hayan expresado su opción de no cotizar
- Pensionados por vejez, vejez anticipada a invalidez total.
- Hayan cotizado mensualmente como dependiente por el límite máximo imponible mensual (73,2 UF, aproximadamente \$1.880.000).

- Tengan honorarios anuales inferiores a \$ 301.250 (La Renta



imponible anual menor al ingreso mínimo mensual, \$ 241.000 actualmente).

De esta forma, es la propia demandante quien, asumiendo su condición de prestador de servicios a honorarios, debió proceder a enterar sus cotizaciones previsionales y de acuerdo al régimen especialmente previsto para los prestadores de servicios a honorarios, salvo solicitud expresa de exención, lo cual es materia entre la demandante y el Servicio de Impuestos Internos.

Es más, así expresamente lo reconoció al momento de suscribir los contratos respectivos, pues la demandante en la cláusula quinta: *“declara conocer y actuar, en relación al presente convenio, de conformidad a las prescripciones de la ley N° 20.255, modificada por la ley N° 20.894, que estableció que las personas contratadas a honorarios estarán obligados a realizar cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y salud” y en virtud de lo anterior, se obliga, “a cotizar sobre el 100% de su renta imponible mensual, con el tope legal establecido. Dicha obligación tendrá, para todos los efectos, el carácter de irrenunciable.”*

Enriquecimiento sin causa.

De acuerdo al artículo 17 del DL N° 3500, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador solo su retención y posterior entero en la institución previsional correspondiente, por lo que no es procedente que se solicite que el demandado pague, a su costa, las imposiciones previsionales. De esta manera, si eventualmente se ordenare jurisdiccionalmente su pago, el valor de las mismas deberá descontarse de los emolumentos que correspondiere pagar a la trabajadora. En efecto, la Subsecretaría no ha efectuado ningún descuento y/ o retención a la demandante con el objeto de efectuar el



pago de las cotizaciones previsionales y de salud, recibiendo ésta el monto íntegro de las remuneraciones, por lo que en el improbable evento de determinarse que ha existido un vínculo laboral entre las partes, el pago de las cotizaciones previsionales del período respectivo no puede reclamarse a la Subsecretaría.

De la misma manera, en el improbable caso de considerarse que existió un contrato de trabajo, la remuneración acordada fue la determinada por el contrato de honorarios, correspondiendo cualquier descuento sobre dicho monto, y no por sobre éste. Cualquier determinación en otro sentido sería exceder lo convenido por las partes, más aún, teniendo en cuenta los impuestos a retener y a pagar se determinan en base al monto pactado.

Improcedencia de las pretensiones pecuniarias demandadas.

Los anteriores argumentos por sí solos permiten desestimar en todas y cada una de sus partes la demanda de autos, resulta oportuno indicar la improcedencia de las prestaciones indemnizatorias solicitadas por la demandante, atendida la naturaleza jurídica de su vinculación con el Estado.

a) Improcedencia de indemnización por mes de aviso, años de servicio, recargo legal y feriado proporcional.

La solicitud del pago de una indemnización por mes de aviso y años de servicio y recargo legal, contemplada en normas del Código Laboral, resulta del todo inaplicable en la especie, constituyendo un intento por modificar en forma unilateral y sin que exista causa alguna que lo justifique, la naturaleza jurídica de la relación de la demandante para con la demandada.

Dicho en otros términos, a través de esta petición se introducen



elementos ajenos a la discusión de autos y que son enteramente inaplicables, desconociendo la realidad de un modo flagrante.

Tampoco es admisible la demanda del pago del feriado proporcional, no sólo porque la demanda no señala su origen, ni precisa su base de cálculo, sino porque en el derecho administrativo, el funcionario a honorarios que cesa en el cargo pierde aquellos estipendios que no hizo efectivo. En este orden de ideas, resulta absolutamente improcedente la petición de feriado anual solicitado.

b) Improcedencia de pago de cotizaciones previsionales para casos como el sublite en que se discute la existencia de una relación laboral.

El pago de las cotizaciones solicitadas es improcedente en casos que, como en la especie, se discute entre las partes la existencia de un vínculo normado por el Código del Trabajo.

En estos casos, la existencia de una relación de naturaleza laboral nacería sólo con la sentencia que acoge una demanda de esa naturaleza, o al menos debería considerarse que el título surge con la dictación de ella. Por lo que la obligación de enterar cotizaciones previsionales sólo podría exigirse a partir del inicio de la relación laboral ya declarada, jamás con anterioridad.

Como se ha dicho, el único vínculo que existió durante el período que prestó sus servicios el demandante fueron diversos y consecutivos contratos de prestación de servicios de naturaleza civil, en el que, como contraprestación, se les pagaban honorarios. Así, el actor, al recibir sus honorarios, emitía la respectiva boleta y su parte procedía a la retención del 10% de la misma por concepto de PPM, de conformidad con la ley. Por este motivo, la Subsecretaría jamás se



encontró obligada al pago de cotizaciones previsionales, ya que no existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, por lo que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas.

En conclusión, la pretensión de la demandante, en el sentido de que se le paguen las cotizaciones previsionales durante el período trabajado, no podrá ser acogida, ya que entre las partes no existió relación laboral, y el Fisco no se encontraba obligado a cancelar las cotizaciones previsionales.

A mayor abundamiento, ley N° 20.255 y, partir del año 2012, todas las personas que prestan servicios bajo la modalidad de honorarios tienen la obligación personal (no traspasable a la persona o entidad a quien prestan sus servicios) de realizar cotizaciones previsionales para pensiones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De esta forma, están obligados a cotizar todas aquellas personas que:

- ☐ Perciban honorarios por actividades independientes; o
- ☐ Perciban rentas por Boletas de Honorarios; o
- ☐ Perciban rentas por Boletas de Prestación de Servicios de Terceros; o
- ☐ Perciban rentas por Participaciones de Sociedad de Profesionales.

Por lo demás, debe recordarse que, de acuerdo al art. 17 del D.L. N° 3500, el pago de las cotizaciones previsionales es de cargo del trabajador, correspondiéndole al empleador solo su retención y posterior entero en la institución previsional correspondiente, por lo que no es procedente que se solicite que el demandado pague, a su



costa, las imposiciones previsionales; pues en el presente caso es un hecho pacífico que el Fisco nunca ha hecho retenciones de naturaleza previsional respecto de la actora, pues ello es jurídicamente inadmisibles en un régimen de prestación de servicios a honorarios.

En conclusión, la pretensión de la demandante, en el sentido de que se les paguen las cotizaciones previsionales durante el período trabajado, no podrá ser acogida, ya que entre las partes no existió relación laboral, y el Organismo no se encontraba obligado a cancelar las cotizaciones previsionales.

Más aún, en el evento improbable que se estime del caso que es procedente el pago de cotizaciones previsionales por el periodo en que el demandante prestó servicios sujeto a un contrato a honorarios a suma alzada, en ningún caso esta prestación debería incorporar multas, reajustes e intereses, salvo aquellos que se devenguen con posterioridad a que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, ya que sólo en ese instante podría sostenerse que existe mora.

“El deudor está en mora,

1º Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora;

2º Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla;

3º En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”

c) Improcedencia de la aplicación de la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo en lo que se refiere al pago de remuneraciones para casos como el sublite en que se discute la existencia de una relación laboral.



Es menester señalar que tendrá que desecharse la petición contraria referida al pago de las remuneraciones por el lapso comprendido entre la fecha del término del vínculo contractual de la demandante y mientras no se convalide el despido -como pide el actor-, conforme lo prevé el artículo 162 del Código del Trabajo.

La sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo –conocida como nulidad del despido- son improcedentes en casos que, como en la especie, se discute entre las partes la existencia de un vínculo normado por el Código del Trabajo.

Sin perjuicio de lo expuesto respecto del principio de “legalidad competencial”, ya señalado, respecto de los cuales prohíben a los Servicios de la Administración del Estado el celebrar contratos bajo la normativa del Código del Trabajo, sin que exista norma legal que así lo disponga; y consecuentemente tampoco tienen la obligación de pagar cotizaciones previsionales y de salud respecto de las personas que tienen vínculo con el Estado bajo la modalidad de Honorarios, el pretender la existencia de este tipo de pago, atenta contra el principio de la supremacía constitucional, juridicidad y legalidad dual ya referida.

En mérito a lo expuesto, con todo, de existir la obligación de un pago de estas prestaciones en este tipo de casos (honorarios), previamente debe establecerse y declararse por sentencia firme y ejecutoriada que el vínculo obedece a una relación laboral y no de honorarios; y tan sólo bajo ese supuesto de hechos, podría nacer ese tipo de obligación, la que sólo podría exigirse a contar de esa sentencia ejecutoriada en adelante, jamás con efecto retroactivo o desde una data anterior a esa declaración judicial. Con anterioridad a



ello, el Fisco no tenía obligación alguna por expresa aplicación de la Ley y la Constitución.

En efecto, el único vínculo que existió durante el período que prestó sus servicios la actora fue un contrato de honorarios de naturaleza civil, en el que, como contraprestación, se les pagaban honorarios. Así, al recibir sus honorarios, emitía la respectiva boleta electrónica de honorarios y su parte procedía a la retención del 10% de la misma por concepto de retención de segunda categoría, de conformidad con la Ley de la Renta.

Por este motivo, el Fisco de Chile, jamás se encontró obligado al pago de cotizaciones previsionales, ya que no existió un vínculo de naturaleza laboral entre las partes, por lo que malamente podría encontrarse en mora de pagarlas, más aún, cuando conforme al convenio de honorarios suscrito por las partes con plena libertad y conocimiento del alcance de sus cláusulas, se estableció expresamente que “La Consultora”, declara conocer y actuar, en relación al presente documento, de conformidad a las prescripciones de la ley N° 20.255, modificada por la ley N° 20.894, que estableció que las personas contratadas a honorarios estarán obligadas a realizar cotizaciones previsionales para pensiones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y salud. En virtud de lo anterior, “La Consultora” se obliga, a partir del año 2018, a cotizar sobre el 100% de su renta imponible mensual, con el tope legal establecido. Dicha obligación tendrá, para todos los efectos, el carácter de irrenunciable” (Cláusula Quinto Decreto TRA N° 289/20/2018 de 15 de enero de 2018).

Adicionalmente, resulta útil manifestar que, pretender la



aplicación de la denominada “Ley Bustos”, es hacer una aplicación errónea de la misma, atendido que el objetivo de esta, según consta en el Mensaje Presidencial señala que *“consiste en que el empleador, quien ha descontado de las remuneraciones de sus trabajadores las cotizaciones correspondientes, cumpla con la subsecuente obligación de pago, a la que la obliga la ley, antes de dar por terminada la relación de trabajo”*; luego agrega *“se estima, que pues, que el término del contrato no debe surtir sus plenos efectos jurídicos mientras el empleador se encuentre en mora en el pago de los compromisos previsionales relativo a los descuentos que para el efecto hizo al trabajador”*. En consecuencia la aplicación de esta norma en la forma solicitada por el demandante, esto es como una sanción, es presuponer una conducta de evasión, morosidad y contumaz de esta parte, cuestión que no ha acontecido en la especie.

Por otra parte, la historia de la ley N°19.631 de 1999 sólo contempla la sanción de la denominada “Ley Bustos” para el empleador que habiendo retenido las cotizaciones previsionales no las entera en la entidad previsional correspondiente. El Mensaje Presidencial, señaló que *“el término del contrato no debe surtir sus plenos efectos jurídicos mientras el empleador se encuentre en mora en el pago de los compromisos previsionales relativo a los descuentos que para el efecto hizo al trabajador”*.

Es decir, si bien el objetivo fue obtener el pago de las cotizaciones previsionales, el proyecto no tuvo en vista las situaciones relativas a los contratos honorarios en los que la existencia de la relación laboral se establece en la sentencia, sino solo aquellos casos en que la relación laboral no se discutía y las cotizaciones previsionales eran retenidas pero no pagadas.

En conclusión, la pretensión de la parte demandante, en el



sentido de que se aplique la sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, durante el período en que ésta prestó sus servicios, no podrá ser acogida, ya que entre las partes no existió relación laboral, y la entidad demandada no se encontraba obligada a cancelar las cotizaciones previsionales.

Ahora bien, en el improbable evento que se estime que entre el Fisco de Chile y la demandante existió una relación laboral, este hecho deberá ser declarado por la sentencia que se dicte, razón por la cual de todas maneras es inaplicable en la especie la sanción prevista por el artículo 162 del Código del Trabajo, ya que esta sanción ha sido dispuesta para aquellos casos en que el empleador haya retenido las cotizaciones del trabajador y no las haya enterado en la institución previsional correspondiente y en el caso de marras, ello no ocurrió.

En definitiva, sin perjuicio de la inaplicabilidad de las normas del Código del Trabajo a las relaciones estatutarias que rigen a los funcionarios públicos, resulta indiscutible, que en todo caso, tratándose de órganos de la Administración del Estado, no procede aplicar la sanción de nulidad del despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, como lo ha señalado ya reiteradamente la Corte Suprema.

d) Improcedencia de reajustes, intereses y costas demandadas.

Cabe señalar que como consecuencia de lo expuesto en los acápites anteriores sobre la improcedencia del pago de indemnizaciones sustitutiva y por años de servicio, remuneraciones en conformidad al artículo 162, cotizaciones previsionales, resultan también improcedentes los reajustes, intereses y costas solicitados en el libelo, puesto que entre el Fisco y la actora jamás ha existido un



contrato de trabajo ni relación laboral, y no caben dichas prestaciones, en consecuencia, nada procede salvaguardar de la desvalorización monetaria, y jamás existirá mora por su falta de cumplimiento.

En subsidio, tales reajustes e intereses sólo podrán calcularse a partir de la ejecutoriedad del fallo que declara la existencia de la relación laboral.

Asimismo, tampoco procede que sea condenada en costas, atendido que se ha tenido motivo plausible para litigar.

e) Improcedencia del pago de cotizaciones de Salud

En relación con el pago de las cotizaciones de salud, señala que en el evento que se condenara al Fisco de Chile al pago de tales cotizaciones, se produciría para la entidad de Salud un enriquecimiento injusto que en nada beneficia al supuesto cotizante, ello porque se da a la entidad de salud una suma de dinero que no tiene contraprestación alguna. En efecto se está cotizando por prestaciones de salud que no se prestaron, y que no podrán jamás podrán prestarse.

Se paga a la institución previsional por prestaciones que no ha brindado y que no brindará, produciéndose el enriquecimiento injusto que denuncia.

En tal sentido, no puede estimarse que sea procedente el pago de estas cotizaciones, que no tienen ni causa, ni justificación alguna.

f) Improcedencia del pago del período comprendido entre el 23 de marzo de 2018 y 31 de diciembre del mismo año, por término anticipado del contrato por \$28.799.355.-

La pretensión de la demandante en este sentido es absolutamente improcedente.



Señala que no hay justificación normativa o procedimental alguna que permita a la demandante acceder a una pretensión como la indicada. Es más, este “pago” solicitado no tiene amparo en las normas laborales que intenta hacer aplicable la demandante a su contrato, aún si se entendiere como contrato de trabajo. La acción interpuesta, según su petitorio es de declaración de vínculo laboral, despido injustificado, nulidad del despido, cobro de indemnizaciones y prestaciones laborales y previsionales adeudadas, todas ellas normadas en la ley laboral o previsional, situación que no ocurre con esta pretensión. Pues bien, ninguna de las acciones ejercidas habilita a la demandante para obtener el pago que exige, sino que más bien parece pretender una especie de indemnización del lucro cesante, que en la forma propuesta no es factible de proporcionar por el tribunal, tanto por que no la plantea como tal, no expone sus fundamentos de hecho y derecho y principalmente no la acciona.

Por lo demás, esta sería materia civil de la cual son competentes los tribunales ordinarios en esa materia, lo que alude a la incompetencia alegada por esta parte.

Por tanto, solicita tener por contestada la demanda de autos, en los términos precedentemente expuestos y, en su oportunidad, acoger las excepciones interpuestas; o, en subsidio, rechazar la demanda en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Llamado a conciliación. Que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produjo.

CUARTO: Hechos controvertidos. Que del tenor del debate, se puede determinar que los hechos controvertidos son los siguientes:

1. La existencia de relación laboral, en su caso, fecha de inicio,



fecha de término, funciones que cumplía, lugar de trabajo, la remuneración, los conceptos que la componen y esto para efectos de la base de cálculo también, la existencia de vacaciones y otros beneficios y todas aquellas que estén relacionados.

2. La efectividad de haber sido despedida, la forma en que se produce el despido, demás circunstancias anexas, tales como cumplimiento formalidades legales.
3. La efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas. Concepto y montos.
4. La efectividad de adeudarse cotizaciones de seguridad social por el demandado. Períodos.

QUINTO: Prueba de la parte demandante. Que a fin de probar estos hechos, la parte demandante rindió prueba documental consistente en Decreto Exento N° 366, de 29/05/2014; Decreto Exento N° 796, de 26/12/2014; Decreto Tra N° 289/63/2016; Decreto Tra N° 289/48/2017; Decreto Tra N° 289/20/2018; Certificado de Antigüedad N° 529, de 21/03/2018, de Encargada Unidad de Gestión de Personal (s) de la Subsecretaría de Hacienda; Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 36, 35, 37, 39, 41, 44, 46 y 47, correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2014; Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 61,



correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2015; Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 62, 63, 64, 65,66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 y 74, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016; Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 75 a 86, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2017; Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 87 a 89, correspondientes a los meses de enero a marzo de 2018; Informes mensuales de actividades de los periodos julio, septiembre y diciembre de 2014; enero, marzo, abril, septiembre y noviembre 2015; abril, septiembre, octubre y noviembre de 2016; Decreto Exento RA N° 289/112/2018 de Subsecretaría de Hacienda (término anticipado convenio a honorarios suma alzada a partir del 23 de marzo 2018); Copia de correo electrónico de 8 de febrero de 2018 de Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda a Margarita Peña Ramírez; Copia de correos electrónicos de 22 y 23 de marzo de 2018, de Margarita Peña a Josefina Soto; Copia de correos electrónicos de 26 de marzo, 2 y 3 de mayo de 2018 entre Margarita Peña y Jeannette Leocares; Copia de correo electrónico de 14 de mayo de 2015 de Rosa Ortega, de Unidad de Gestión de Personas del Ministerio de Hacienda a Margarita Peña y archivos adjuntos consistentes en 2 planillas formato Excel con informe de horarios de entrada salida de la demandante de los meses de abril y mayo de 2015; Acta de Comité Técnico del Comité Interministerial de Desarrollo Social del día



miércoles 22 de abril de 2015 y copia de correo electrónico de 24 de abril de 2015 de Roxana Muñoz, asesora Gabinete Ministerio de Desarrollo Social a Margarita Peña en la cual se lo adjunta; Acta de reunión del Comité técnico intersectorial SEVS, de 23 de abril de 2015; Balances de gestión integral del Ministerio de Hacienda de los años 2014, 2015, 2016 y 2017; Tres actas Comité Interministerial de Desarrollo Social; y Catorce actas de Comité Técnico de Desarrollo Social.

Además, rindió prueba testimonial de Natalia Celeste Arena Muñoz; Andrea Bentancor Cazenave; Gonzalo Ernesto Cid Vega; y Marta De La Fuente Olguín, cuyas declaraciones constan íntegramente en el audio de este tribunal.

Además, como Otros Medios de Prueba, solicitó la exhibición de los siguientes documentos:

1. Informes de gestión mensual y anual respecto de todo el periodo contratado, esto es de mayo de 2014, hasta marzo de 2018.
2. Registros de ingreso y salida de la demandante por el periodo demandado 2014 al 2018
3. Decretos que aprueban la Contratación a honorarios de la demandante por el periodo laboral demandado.
4. Contratos a honorarios celebrados entre las partes correspondientes al periodo laboral demandado.

Lo que se tuvo por cumplido.

Finalmente, acompaña la respuesta de los siguientes oficios:



- **AFP CUPRUM**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018.
- **ISAPRE COLMENA**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018
- **AFC CHILE S.A.**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018.

SEXTO: Prueba de la parte demandada. Que a fin de probar estos hechos, la parte demandada rindió prueba documental consistente en Copia de resolución exenta N° 366, de fecha 20 de mayo de 2014; Copia de resolución exenta N° 796, de fecha 26 de diciembre de 2014; Convenio de Prestación de Servicios, de fecha 15 de mayo de 2014 de Carmen Peña Ramírez; Convenio de Prestación de Servicios, de fecha 22 de diciembre de 2014; Certificado del Departamento Administrativo del Ministerio de Hacienda, de doña Margarita del Carmen Peña Ramírez, para el año 2014; Certificado del Departamento Administrativo del Ministerio de Hacienda, en el cual consta el monto bruto anual designado para el convenio de prestación de servicios de la actora, para el año 2015; Declaración jurada simple, de fecha 1 de enero de 2015, emitida por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez; Resolución TRA N° 289/63/2016 de fecha 28 de enero



del año 2016; Resolución TRA N° 289/48/2017 de fecha 20 de enero del año 2017; Copia de Resolución TRA N° 289/20/2018 de fecha 15 de enero del año 2018; Copia de Resolución TRA N° 289/112/2018 de fecha 17 de abril del año 2018; Certificado de Título, de fecha 5 de diciembre de 2006, de Margarita del Carmen Peña Ramírez, en el cual consta el grado de Ingeniera Comercial egresada de la Universidad de Chile y Curriculum; Liquidación de honorarios de Margarita del Carmen Peña Ramírez, desde junio de 2014 a marzo de 2018; Boletas de honorarios electrónica, comprendiendo desde el mes de junio de 2014, hasta marzo de 2018; y Serie de resoluciones exentas comprendidas entre el año 2015 al 2017 en los cuales se conceden las vacaciones de la demandante.

Finalmente, rindió prueba testimonial de Cristóbal Peña Liberona; y Jeannette Leocares Espinoza, cuyas declaraciones constan íntegramente en el audio de este tribunal.

SÉPTIMO: De la excepción de incompetencia, de falta de legitimación activa del demandante, y falta de legitimación pasiva del demandado. Que como puede advertirse, el punto primero y central de esta sentencia se basa en la determinación de la existencia de relación laboral, en su caso, fecha de inicio, fecha de término, funciones que cumplía, lugar de trabajo, la remuneración, los conceptos que la componen y esto para efectos de la base de cálculo también, la existencia de vacaciones y otros beneficios y todas aquellas que estén relacionados.

Al efecto, y según se señala por resolución de la Ittma. Corte, en causa 0-1724-2012, de fecha 21/12/2012: “...la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado



dentro de la esfera de sus atribuciones, y en el caso de los juzgados del trabajo, la regla de atribución de competencia se encuentra en el artículo 420 del Código del ramo, que en su literal a) señala que son de su competencia “ las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral.

Octavo: Lo expuesto basta para desestimar el motivo de nulidad en examen, toda vez que la acción interpuesta se inserta dentro de la regla de atribución de competencia antes citada, siendo una cuestión completamente distinta el éxito de la misma lo que, en definitiva, depende de los hechos que la prueba rendida en el juicio permita asentar y el derecho que le resulte aplicable a tales hechos. Por lo demás, entenderlo como pretende el recurrente dejaría sin posibilidad de accionar a quien alega una relación laboral desconocida por su contraparte, olvidando que lo que se debe analizar al momento de examinar la competencia es la naturaleza de la acción interpuesta.” (Causa MORENO CON SAG)

Atendido lo anterior, siendo el centro de la controversia determinar una cuestión suscitada entre un supuesto empleador y un supuesto trabajador por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación aplicación de un eventual contrato individual de trabajo, este tribunal rechazará las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal, de falta de legitimación activa del demandante, y falta de legitimación pasiva del demandado interpuestas por la parte demandada.

OCTAVO: *Acreditación de los hechos y fundamentos del fallo.* Que el primer punto se basa en la determinación de *la existencia de relación laboral, en su caso, fecha de inicio, fecha de término, funciones que cumplía, lugar de trabajo, la remuneración, los conceptos que la componen y esto para efectos de la base de cálculo también, la existencia de vacaciones y otros beneficios y todas*



aquellas que estén relacionados.

Para tal efecto, la parte demandante ha acompañado prueba documental consistente en Decreto Exento N° 366, de 29/05/2014, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 19/5/2014 al 31/12/2014.

Acompaña además, Decreto Exento N° 796, de 26/12/2014, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2015 al 31/12/2015.

Acompaña además, Decreto Tra N° 289/63/2016, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2016 al 31/12/2016.

Acompaña además, Decreto Tra N° 289/48/2017, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2017 al 31/12/2017.

Acompaña además, Decreto Tra N° 289/20/2018, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2018 al 31/12/2018.

Acompaña además, Certificado de Antigüedad N° 529, de 21/03/2018, de Encargada Unidad de Gestión de Personal (s) de la Subsecretaría de Hacienda, desde el 19/5/2014 a la fecha.

Acompaña además, Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 36, 35, 37, 39, 41, 44, 46 y 47, correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 2014.



Acompaña además, Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 61, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2015.

Acompaña además, Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 y 74, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2016.

Acompaña además, Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 75 a 86, correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2017.

Acompaña además, Boletas de honorarios electrónicas emitidas por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez a la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, números 87 a 89, correspondientes a los meses de enero a marzo de 2018.

Acompaña además, Decreto Exento RA N° 289/112/2018 de Subsecretaría de Hacienda (término anticipado convenio a honorarios suma alzada a partir del 23 de marzo 2018).

Acompaña además, Informes mensuales de actividades de los periodos julio, septiembre y diciembre de 2014; enero, marzo, abril, septiembre y noviembre 2015; abril, septiembre, octubre y noviembre de 2016.

Acompaña además, Copia de correo electrónico de 8 de febrero de 2018 de Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda a Margarita Peña Ramírez, en que solicita permiso administrativo.



Acompaña además, Copia de correo electrónico de 14 de mayo de 2015 de Rosa Ortega, de Unidad de Gestión de Personas del Ministerio de Hacienda a Margarita Peña y archivos adjuntos consistentes en 2 planillas formato Excel con informe de horarios de entrada salida de la demandante de los meses de abril y mayo de 2015.

Acompaña además, Acta de Comité Técnico del Comité Interministerial de Desarrollo Social del día miércoles 22 de abril de 2015 y copia de correo electrónico de 24 de abril de 2015 de Roxana Muñoz, asesora Gabinete Ministerio de Desarrollo Social a Margarita Peña en la cual se lo adjunta.

Acompaña además, Acta de reunión del Comité técnico intersectorial SEVS, de 23 de abril de 2015.

Acompaña además, Balances de gestión integral del Ministerio de Hacienda de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Acompaña además, Tres actas Comité Interministerial de Desarrollo Social.

Finalmente, acompaña Catorce actas de Comité Técnico de Desarrollo Social.

Además, rindió prueba testimonial de **Natalia Celeste Arena Muñoz. RUN 16.310.558-K**, quien señaló que trabajó en el Ministerio del Trabajo y con ocasión de un proyecto de ley tuvo una reunión con el Ministerio De Hacienda, y trabajó con la actora, tenían la misma jefa, Paula Benavides, y trabajaban en temas del Ministerio de Desarrollo Social. Se reunían con Paula Benavides y recibían instrucciones de ella acerca de los proyectos de ley de las pensiones



de las Fuerzas Armadas y el Consejo de Situación Previsional. Además, iban a almuerzos de trabajo. Indica que a la actora la conoció el año 2015, ella iba con Paula a las reuniones, y trabajaron juntas en el año 2017. La testigo empezó a trabajar en Hacienda, en una oficina grande, y ella trabajaba al lado suyo. Allí tenían que cumplir una jornada laboral, eran las que llegaban más temprano, la actora ya estaba antes de las 8 horas, y salían cerca de las 18 horas. Esta jornada se cumplía diariamente. La testigo trabajaba a contrata, y la actora no estaba a contrata. Asesoraban técnicamente acerca de las materias que se referían a recursos públicos. Las labores eran permanentes, era referido al uso de los recursos públicos, en salud, desarrollo social y pensiones. Era su labor conjunta todo lo referido a proyectos que involucraran recursos públicos. Había otras personas a contrata, pero todos cumplían horario, había hora de almuerzo. Indica que en el Ministerio de Hacienda estuvieron hasta el 11 de marzo del 2018. La actora trabajó hasta dos semanas más después del 11 de marzo, y al parecer no había motivos para despedirla. Hubo que esperar la llegada del nuevo gobierno. Indica que la actora tenía los mismos derechos que la testigo, que estaba a contrata, tenía vacaciones, derecho a licencia. Indica que antes de trabajar en Hacienda, la actora trabajaba en la Subsecretaría De Previsión Social. Allí estaba a contrata. Paula Arancibia se la quiso llevar a Hacienda por los grandes conocimientos de la actora en materia de previsión.

Refirió que llegó al Ministerio del Trabajo en el año 2015 como abogada. Señala que no sabe para qué estaba contratada la actora, pero al parecer era para lo mismo que para lo que estaba contratada ella. Indica que no vio el contrato de prestación de servicios de la



actora, ni sabe su remuneración. No vio los reportes mensuales de la actora. Señala que mientras estuvo allí, hubo siempre coordinación con Paula Benavides.

Depuso además, la testigo **Marta María Carolina De La Fuente Olguín. RUN 7.705.308-5**, quien señaló que conoce a la actora, pues trabajó como 2 a 3 años como contraparte ministerial como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social. La actora era analista y profesional referido a proyectos de ley de cotizaciones de trabajadores independientes, de subsidio único familiar, y bodas de oro, y otro proyecto referido a la ley de relaciones sociales. Señala que no sabe bajo qué régimen prestaba servicios la actora, pero cumplía horario, estaba subordinada, su jefa era Paula. Imagina que estaba contratada en labores permanentes, y participaba de varios equipos que estaban a cargo de Paula Benavides. La testigo estuvo en la subsecretaría hasta fines del año 2016, y posteriormente se la encontró también.

Refirió que no sabe si la actora estaba a contrata o a planta, era la contraparte técnica. No sabe cuándo la actora entró a trabajar al ministerio.

Depuso además, la testigo **Andrea Betancor Cazenave. RUN 22.277.695-3**, quien señaló que conoce a la actora, pues ella es economista, contraparte y colega suya en el Ministerio de Hacienda. Fue su contraparte en la elaboración del reglamento Chile Crece Contigo. Ella llevaba el tema de las pensiones. La testigo era coordinadora de género del Ministerio de Hacienda, y la actora



trabajaba con la coordinadora de políticas sociales, Paula Benavides, señalando la testigo que ella era par con Paula Benavides. La actora estaba contratada bajo boleta de honorarios, pero tenía jefa, y estaba sujeta a horarios. Ella tenía vacaciones. Tenía una oficina en el piso 11, y era parte del equipo de Paula Benavides, con los economistas Miguel Lorca y Juan Manuel Badilla. Indica que las funciones de la actora eran permanentes, habituales, elaboraba minutas para su jefa, revisaba proyectos de ley, era contraparte de DIPRES, y representaba al ministerio en la mesa del adulto mayor y de cuidado, en el Ministerio de Desarrollo Social, estaba en políticas sociales.

Refirió que en los temas sociales y previsionales la actora es experta. Ella estaba en Previsión Social y Paula le pidió que se fuera a Hacienda con ella. Esto fue en el año 2014. La testigo era una persona de confianza del Ministro de Hacienda, y estaba a honorarios. Señala que algunos de los economistas estaban a contrata y otros a honorarios, no sabe en cuál condición estaba la actora. Señala que todos lo que estaban a honorarios debían hacer un informe de todo lo que hay que hacer, la actora debe haberlo hecho, o en caso contrario, no le habrían pagado.

Finalmente, depuso el testigo **Gonzalo Ernesto Cid Vega. RUN 8.189.215-6**, quien señaló que conoció a la actora en el año 2014 cuando el testigo asumió como Jefe de la Dirección de Estudio de la Subsecretaría de Previsión Social. en que la actora era una profesional de carrera que llevaba más de 8 años en el servicio público. Indica que la actora antes trabajaba en la subsecretaría de previsión social, y antes que el testigo llegara, la actora tuvo un



ascenso con una jefatura intermedia en la misma dirección de estudios de la que el testigo se hizo cargo. Al estar el testigo un par de meses, la actora le dijo que le habían ofrecido irse al Ministerio de Hacienda, y ante ello, le solicitó que Paula Benavides pudiera llamarlo. Indica que la actora se fue a un trabajo permanente al Ministerio de Hacienda, que supervisa distintos ministerios. Señala el testigo que donde él estaba, la actora estaba a contrata y llevaba más de 8 años en el Ministerio de Hacienda Grado 4, escalafón más alto de la contrata. La actora era una profesional de mucha competencia en el ámbito previsional, de seguridad y salud en el trabajo, y medición de la pobreza. Indica que las labores que realizaba la actora en Hacienda eran labores permanentes.

Además, como Otros Medios de Prueba, solicitó la exhibición de los siguientes documentos:

1. Informes de gestión mensual y anual respecto de todo el periodo contratado, esto es de mayo de 2014, hasta marzo de 2018.
2. Registros de ingreso y salida de la demandante por el periodo demandado 2014 al 2018
3. Decretos que aprueban la Contratación a honorarios de la demandante por el periodo laboral demandado.
4. Contratos a honorarios celebrados entre las partes correspondientes al periodo laboral demandado.

Lo que se tuvo por cumplido.

Finalmente, acompaña la respuesta de los siguientes oficios:

- **AFP CUPRUM**, que informa el estado de pago de cotizaciones



previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018, que no cuenta con cotizaciones pagadas por la demandada.

- **ISAPRE COLMENA**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018, que no cuenta con cotizaciones pagadas por la demandada.

- **AFC CHILE S.A.**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018, que señala que la actora no está afiliada a dicha institución.

Por su lado, la parte demandada rindió prueba documental consistente en Copia de resolución exenta N° 366, de fecha 20 de mayo de 2014, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Copia de resolución exenta N° 796, de fecha 26 de diciembre de 2014, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Convenio de Prestación de Servicios, de fecha 15 de mayo de 2014 de Carmen Peña Ramírez, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Convenio de Prestación de Servicios, de fecha 22 de diciembre de 2014, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Certificado del Departamento Administrativo del Ministerio de Hacienda, de doña Margarita del Carmen Peña



Ramírez, para el año 2014.

Acompaña además, Certificado del Departamento Administrativo del Ministerio de Hacienda, en el cual consta el monto bruto anual designado para el convenio de prestación de servicios de la actora, para el año 2015.

Acompaña además, Declaración jurada simple, de fecha 1 de enero de 2015, emitida por doña Margarita del Carmen Peña Ramírez.

Acompaña además, Resolución TRA N° 289/63/2016 de fecha 28 de enero del año 2016, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Resolución TRA N° 289/48/2017 de fecha 20 de enero del año 2017, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Copia de Resolución TRA N° 289/20/2018 de fecha 15 de enero del año 2018, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Copia de Resolución TRA N° 289/112/2018 de fecha 17 de abril del año 2018, del tenor antes mencionado.

Acompaña además, Certificado de Título, de fecha 5 de diciembre de 2006, de Margarita del Carmen Peña Ramírez, en el cual consta el grado de Ingeniera Comercial egresada de la Universidad de Chile y Curriculum.

Acompaña además, Liquidación de honorarios de Margarita del Carmen Peña Ramírez, desde junio de 2014 a marzo de 2018.

Acompaña además, Boletas de honorarios electrónica, comprendiendo desde el mes de junio de 2014, hasta marzo de 2018.

Finalmente, acompaña una serie de resoluciones exentas comprendidas entre el año 2015 al 2017 en los cuales se conceden las vacaciones de la demandante.



Finalmente, rindió prueba testimonial de **Cristóbal Carlos Enrique Peña Liberona. RUN 15.621.320-9**, quien señaló que trabaja en el Ministerio de Hacienda y conoce a la actora. Señala el testigo que es el Jefe de Gabinete del Subsecretario de Hacienda, a contar del 12 de marzo del año 2018, y al llegar a trabajar la actora, trabajaba a honorarios en la subsecretaría. Señala que la actora fue contratada como experta en materias de previsión social, pobreza y previsión. Ella llegó el año 2014 bajo la modalidad a honorarios, y formaba parte de una coordinación de estudios que existía en la Subsecretaría De Hacienda. Los años siguientes siguió en ese lugar, y posteriormente esa coordinación se eliminó, y la actora realizaba esas mismas funciones, pero ahora en la Coordinación De Políticas Sociales. Había una coordinadora llamada Paula Benavides, quien era la jefatura de la actora. Entiende que la actora estaba a contrata en otro ministerio, el de Desarrollo Social, por cerca de 8 años, y posteriormente pasó a honorarios el año 2014 en la Subsecretaría de Hacienda para materias específicas. Señala que quien decide contratar a una persona es el propio coordinador, quien ve las necesidades que tiene. No sabe que la actora haya desempeñado labores en otras materias más allá de las que fue contratada. Señala que la actora tiene derecho a vacaciones, pues la Contraloría General de la República ha dicho que se debe controlar la asistencia, y debe tener derecho a vacaciones. Indica que los asesores van a las comisiones, de aquellas en que se trata el tema en que tiene su conocimiento técnico. Señala que la actora mantuvo las mismas labores específicas. Indica que la actora ganaba más de 3 millones de pesos brutos. Ella siempre estuvo sujeta a un contrato a honorarios, uno que partió a mediados de año, y posteriormente, otros



que partieron el 1° de enero. Indica que no hay continuidad en el servicio de la actora, ella optó por un convenio a honorarios. Señala que los convenios son estándar, y lo que cambió fueron las funciones específicas para las que ha sido contratada.

Refirió el testigo que llegó el 12/3/2018 al ministerio. Tuvo una reunión con ella para comunicarle el despido. Al parecer, estuvo como 15 días en la institución con ella.

Finalmente, depuso la testigo **Jeannette Angélica Leocares Espinoza. RUN 12.670.075-K**, quien señaló que conoce a la actora, y uno de los roles de la testigo es elaborar los contratos de personal de planta y a honorarios. Al conocer a la actora estaba de encargada, y todo lo referido a la unidad le llegaba a la testigo. Al ingresar al servicio, se le indicó a la testigo si la persona está a contrata o a honorarios. Indica que a la actora la contrataron como experta altamente calificada en alguna área, y ella fue como asesora de la coordinación de estudios. No recuerda la función específica para la que fue contratada, pero sabe que la actora es ingeniera comercial. Indica la testigo que ella recibe los informes mensuales, los que se adjuntan a la boleta de honorarios, donde se informan las actividades de la persona en el mes. Indica que los contratados a honorarios son contratados como expertos o como consultores, y no todos tienen jornada laboral, y los que sí tienen jornada laboral, tienen derechos. Se homologa el convenio al estatuto administrativo. Señala que en el Ministerio no hay gente contratada por contrato de trabajo. Indica que en el año 2014 al ingresar, era libre, pero desde el año 2015 hay una jornada laboral, hay registro de reloj control, solicitudes de permiso.



Señala que sabe que la actora trabajaba como la coordinadora de estudios, y con el equipo, que eran 3 personas más, siendo la jefatura doña Paula Benavides. Señala que la actora estaba en la coordinación de estudios. No sabe que haya cambiado de funciones. Al parecer, la actora tenía unos días pendientes de vacaciones.

Que al respecto, el artículo 7 del Código del Trabajo señala que *“un contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”*.

Agrega el artículo 8 que *“toda prestación de servicios en los términos señalados en el artículo anterior, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Los servicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o a aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio, no dan origen al contrato de trabajo”*.

Al respecto, la Excm. Corte Suprema ha manifestado: *“la relación de subordinación o dependencia se manifiesta por signos externos, tales como la facultad de mando que tiene el empleador y la obligación del trabajador de acatarlas instrucciones de éste, la continuidad de los servicios, la supervigilancia por el empleador en el desarrollo de las funciones, la concurrencia diaria al lugar de trabajo, el cumplimiento de un horario de trabajo y otras análogas o similares”* (Corte Suprema, Rol 527-1998 de 9 de julio de 1999).

Que conforme ha sido dicho por la doctrina y la jurisprudencia, la subordinación o dependencia, elemento que caracteriza la relación laboral, debe ser analizado de manera casuística, es decir, caso a caso, y por ende, debe analizarse la manera como la actora se



desempeñaba ante el servicio demandado para los efectos de establecer si había o no relación laboral.

Que del tenor de los contratos de prestación de servicios a honorarios, en su cláusula primera aparecen, entre otras, como obligaciones de la “consultora” (la actora), las siguientes:

- Elaborar minutas técnicas e insumos para ser utilizados en las distintas iniciativas lideradas por el ministerio.
- Apoyar en el diseño de políticas públicas, participando de la elaboración de informes, proyectos de ley, y presentaciones especialmente en materias relacionadas con sistemas previsionales, protección social, pobreza y focalización.
- Apoyar técnicamente en los requerimientos de comisiones o consejos que se relacionen con el ministerio en materia de sistema de pensiones.

En la cláusula tercera se señala como retribución un honorario, el que en el último contrato, tiene un valor mensual de \$3.119.064 pesos.

En la cláusula cuarta se señala como derecho el pago de la asignación de alojamiento y alimentación, en caso de traslado fuera del lugar habitual de los servicios.

A contar del año 2015, la actora contaba con los siguientes beneficios adicionales:

- Vacaciones por 15 días durante el año calendario;



- Permiso con pago de honorarios en caso de muerte de padres, cónyuge o hijos. Y permiso parental por nacimiento;
- Permiso por 5 días con pago de honorarios en caso de matrimonio o acuerdo de unión civil.
- Derecho a pago de honorarios en caso de licencia médica.
- Derecho a sala cuna;
- Permiso post natal parental;
- Reposo en caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional;

En la cláusula novena se señala que la actora está sujeta a una jornada semanal de 44 horas semanales, de lunes a viernes de 08.00 a 20.00 horas, debiendo registrar su asistencia.

Que del tenor de lo mencionado en los contratos de prestación de servicios a honorarios, en particular su cláusula primera, que se mantiene vigente durante toda la prestación de servicios, y a lo referido en los correos electrónicos, es posible concluir que la actora estaba sujeta a instrucciones específicas de las labores a realizar, y además, debía dar cuenta de las labores efectuadas. Además, el contrato da cuenta que la actora estaba sujeto a un horario y a un registro de asistencia, el que fue debidamente acompañado.

Ello a su vez, es concordante con lo mencionado por los testigos Natalia Celeste Arena Muñoz; Andrea Bentancor Cazenave; Gonzalo Ernesto Cid Vega; y Marta De La Fuente Olguín, todos los cuales mencionaron que la actora contaba con un horario de entrada, el que,



como se advierte de la copia de correo electrónico de 14 de mayo de 2015 de Rosa Ortega, de Unidad de Gestión de Personas del Ministerio de Hacienda a Margarita Peña y archivos adjuntos consistentes en 2 planillas formato Excel con informe de horarios de entrada salida de la demandante de los meses de abril y mayo de 2015, era debidamente registrado, por lo que se advierte por este juez que la demandante prestaba servicios para la demandada en un claro sentido vertical, es decir, sujeta a instrucciones, órdenes, y a controles por parte de quien recibía sus servicios personales mediante la persona de la Coordinadora de Políticas Sociales, según indica la cláusula primera de los convenios acompañados, a quien debía entregar periódicamente el informe mensual de actividades, requisito necesario e indispensable para recepcionar el pago mensual.

Además, en lo referido a la continuidad en la prestación de los servicios, ésta puede ser obtenida de los contratos de honorarios acompañados por ambas partes, en que se señala que la actora prestó servicios ininterrumpidos para la demandada en los siguientes periodos:

- Decreto Exento N° 366, de 29/05/2014, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 19/5/2014 al 31/12/2014.
- Decreto Exento N° 796, de 26/12/2014, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2015 al 31/12/2015.



- Decreto Tra N° 289/63/2016, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2016 al 31/12/2016.
- Decreto Tra N° 289/48/2017, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2017 al 31/12/2017.
- Decreto Tra N° 289/20/2018, que contrata a la actora por servicios a suma alzada, para prestar asesoría en el área de coordinación de estudios, desde el 1/1/2018 al 31/12/2018.

Finalmente, mediante el Decreto Exento RA N° 289/112/2018 de Subsecretaría de Hacienda, se pone término anticipado al convenio de honorarios a suma alzada suscrito por el demandante a partir del 23 de marzo 2018.

De esta manera, es dable concluir que desde el 19/5/2014 al 23/3/2018 la actora prestó servicios a la demandada de forma ininterrumpida, de lo que se puede obtener que la prestación de los servicios debe entenderse como un contrato de trabajo de carácter indefinido.

Que atendido todo lo anterior, este juez es del parecer que los servicios prestados por el actor pueden ser calificados jurídicamente como un contrato de trabajo. Por ello, necesario es ahora pronunciarse acerca de las estipulaciones del contrato de trabajo.

Que al efecto, el artículo 9 del Código del Trabajo, señala lo siguiente en sus incisos primero a cuarto: *“El contrato de trabajo es*



PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO
SANTIAGO

consensual; deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro del plazo de quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco unidades tributarias mensuales.

Si el trabajador se negare a firmar, el empleador enviará el contrato a la respectiva Inspección del Trabajo para que ésta requiera la firma. Si el trabajador insistiere en su actitud ante dicha Inspección, podrá ser despedido, sin derecho a indemnización, a menos que pruebe haber sido contratado en condiciones distintas a las consignadas en el documento escrito.

Si el empleador no hiciere uso del derecho que se le confiere en el inciso anterior, dentro del respectivo plazo que se indica en el inciso segundo, la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador”.

Que atendido lo señalado en la normativa legal, de las probanzas rendidas en la causa, en particular, lo indicado en los contratos de prestación de servicios a honorarios, en particular, el del año 2018, último firmado por la actora, y las boletas de honorarios acompañadas por ambas partes, aparece que la actora percibía como remuneración la suma de \$3.119.064 pesos mensuales.

En lo referido a las labores desempeñadas, del tenor de la probanza rendida, aparece que la actora se desempeña en labores de o asesoría, para el Área de Coordinación de Estudios, según indican



los contratos de prestación de servicios a honorarios, que como se dijo precedentemente, tienen la calidad de contrato de trabajo.

Que en lo referido a la alegación efectuada por la demandada en lo relativo a que es improcedente jurídicamente que el FISCO pueda contratar bajo el régimen del Código del Trabajo a personas, aparece que ello, es plenamente procedente.

Ello, porque el Artículo 11° de la Ley 18.834 (Estatuto Administrativo), señala lo siguiente:

“Artículo 11.- Podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.

Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.”

Que de esta manera, del tenor de la norma antes indicada, aparece que quienes le prestan servicios a honorarios, se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto.

Así entonces, la probanza testimonial rendida por la parte demandante da cuenta que la actora se desempeñaba sujeta a los horarios que emanaban de la función que ella desempeñaba, y a las



instrucciones de su jefatura, lo que denota la verticalidad del mando, y la sujeción a ella por parte de la actora.

Así, este tribunal entiende que la parte demandante rindió prueba suficiente y bastante para acreditar la existencia de una relación laboral entre las partes, en que los documentos que se acompañan, y el claro sentido funcionario de su labor da cuenta de cómo se vinculaban la demandante con la demandada, y en que los hechos dieron cuenta que estaba sujeta a órdenes e instrucciones proporcionadas por la demandada, por lo que este juez advierte que existe subordinación o dependencia, lo que caracteriza una relación de tipo laboral, entendiendo este juez que el documento firmado por el actora, como contrato de prestación de servicios a honorarios, es por principio de primacía de la realidad, un contrato de trabajo.

Que ahora, corresponde determinar, la efectividad de haber sido despedida, la forma en que se produce el despido, demás circunstancias anexas, tales como cumplimiento formalidades legales.

Que para tal efecto, se ha acompañado el Decreto Exento RA N° 289/112/2018 de Subsecretaría de Hacienda, se pone término anticipado al convenio de honorarios a suma alzada suscrito por el demandante a partir del 23 de marzo 2018. Indica la resolución que “*lo anterior se fundamenta en una reestructuración de funciones dentro del ministerio de hacienda, en atención a que no existe una coordinación de estudios, en don se desempeña la señorita Peña, por lo que sus servicios serán asumidos dentro de la coordinación de políticas sociales, entre los diferentes asesores que se desempeñan en dicha área, tornándose innecesarios sus servicios, junto con que*



de mantenerlos se incrementaría el presupuesto de esta cartera, lo que no guarda relación con el proceso de racionalización institucional y de optimización de los recursos públicos, así determinado e informado por el Jefe de Servicio”.

Se indica como fecha de término del vínculo contractual el 23/3/2018.

De esta manera, aparece que la demandada mediante este documento ha dado un fundamento fáctico para dar cuenta de su terminación, debiendo la parte demandada acreditar el fundamento de la terminación de los servicios.

Que sobre este punto, la parte demandada ha acompañado prueba testimonial de Cristóbal Carlos Enrique Peña Liberona; y Jeannette Angélica Leocares Espinoza, quienes refirieron que llegó el año 2014 bajo la modalidad a honorarios, y formaba parte de una coordinación de estudios que existía en la Subsecretaría De Hacienda. Agregaron que posteriormente esa coordinación se eliminó, y la actora realizaba esas mismas funciones, pero ahora en la Coordinación De Políticas Sociales. Había una coordinadora llamada Paula Benavides, quien era la jefatura de la actora.

Además, el testigo Cristóbal Carlos Enrique Peña Liberona indicó que llegó el 12/3/2018 al ministerio. Tuvo una reunión con ella para comunicarle el despido. Al parecer, estuvo como 15 días en la institución con ella.

Que de la forma antes indicada, este magistrado ha llegado a la conclusión que la parte demandante ha podido acreditar la efectividad de haber sido despedida, lo que se hizo mediante el Decreto Exento



RA N° 289/112/2018 de Subsecretaría de Hacienda, se pone término anticipado al convenio de honorarios a suma alzada suscrito por el demandante a partir del 23 de marzo 2018, documento que le fue entregado a la actora por el señor Peña Liberona.

Ahora, en lo referente a la efectividad de los hechos indicados en tal documento, la parte demandante no ha podido rendir prueba suficiente y bastante que dé cuenta de la reestructuración de funciones dentro del Ministerio de Hacienda, particularmente que los servicios que realizaba la actora sean asumidos dentro de la Coordinación de Políticas Sociales, y en especial, que se tornen innecesarios sus servicios, en especial, cuando se ha tildado a la actora de experta en materias previsionales. Menester es indicar que la actora se desempeñaba en un área absolutamente técnica, en un ministerio que precisamente se relaciona con los puntos en los que la actora es experta, por lo que no hay justificación alguna que permita sustentar su desvinculación, máxime si el Estado a través de este ministerio, realiza esta labor, referidos a aspectos previsionales.

Atendido ello, a juicio de este tribunal el despido es injustificado.

De esta manera, y según lo señalado precedentemente, corresponde que la actora sea indemnizada por las prestaciones correspondientes a la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio, y el recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio.

Que tal como se ha indicado precedentemente, la actora percibía como remuneración la suma de \$3.119.064 pesos mensuales, suma



que excede las 90 UF a la que se alude en el artículo 172 del Código del Trabajo.

A su vez, ha sido acreditado que la actora prestó servicios a la demandada de forma ininterrumpida, desde el 19/5/2014 al 23/3/2018, esto es, por 3 años, y 10 meses, por lo que procede el pago de 4 remuneraciones.

Así entonces, el pago que corresponde a la actora es el siguiente:

- indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de 90 UF
- indemnización por años de servicio, por la suma de 360 UF
- recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, por la suma de 180 UF.

La referida UF deberá ser ajustada a la correspondiente al último día del mes anterior al pago, limitándose a dicho monto la base de cálculo.

Finalmente, corresponde establecer, la efectividad de adeudarse las prestaciones demandadas. Concepto y montos; y la efectividad de adeudarse cotizaciones de seguridad social por el demandado. Períodos.

Que sobre este punto, la parte demandante ha acompañado la respuesta de los siguientes oficios:



- **AFP CUPRUM**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018, que no cuenta con cotizaciones pagadas por la demandada.

- **ISAPRE COLMENA**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018, que no cuenta con cotizaciones pagadas por la demandada.

- **AFC CHILE S.A.**, que informa el estado de pago de cotizaciones previsionales de la actora MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMÍREZ, RUT 10.221.109-K, respecto al periodo que va desde mayo de 2014 a marzo de 2018, que señala que la actora no está afiliada a dicha institución.

De esta manera, atendido a que se ha acreditado que hay relación laboral desde el 19/5/2014 al 23/3/2018, es dable concluir que a la actora no se le han pagado las cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, durante todo el periodo trabajado.

En lo referente a la acción de nulidad del despido, no obstante acreditarse que al actor se le adeudan cotizaciones previsionales, este tribunal es del parecer de no otorgar la sanción de nulidad del despido del artículo 162 del Código del Trabajo, por estimar que siendo una sanción, debe interpretarse restrictivamente, y ella debe entenderse



respecto del empleador que estando obligado a retener y pagar las cotizaciones, no lo ha hecho, asunto que no ocurre en la especie.

Por su lado, en lo referente al feriado legal y proporcional, atendida la probanza rendida, en particular, el feriado legal y proporcional, la parte demandada ha acompañado una serie de resoluciones exentas comprendidas entre el año 2015 al 2017 en los cuales se conceden las vacaciones de la demandante.

Que atendido a que se ha acreditado que hay relación laboral desde el 19/5/2014 al 23/3/2018, la última anualidad va desde el 19/5/2016 al 19/5/2017; y el feriado proporcional va desde el 19/5/2017 al 23/3/2018. En las resoluciones exentas comprendidas entre el año 2015 al 2017 en los cuales se conceden las vacaciones de la demandante, se señala lo siguiente:

- concede permiso con goce de remuneraciones:
 - Medio día, el 22/6/2016.
 - 1 día, el 1/7/2016
 - Media tarde, el 29/8/2016.
 - 1 día, el 21/10/2016.
 - 1 día, el 9/1/2017.
 - 10 días, desde el 6/2/2017 al 17/2/2017.
 - 3 días, desde el 28/2/2017 al 2/3/2017.



- 1 día, el 27/6/2017.
- 2 días, desde el 21/9/2017 al 22/9/2017.
- Medio día, el 13/11/2017.
- 2 días, desde el 14/11/2017 al 15/11/2017.
- Medio día, el 11/7/2017.

De esta forma, en la anualidad 19/5/2016 al 19/5/2017 la actora hizo uso de 17 días hábiles de permiso con goce de remuneraciones, que se deben asimilar a las vacaciones; y en el periodo, 19/5/2017 al 23/3/2018, la actora hizo uso de 6 días hábiles de permiso con goce de remuneraciones, que se deben asimilar a las vacaciones.

Que entonces, en el periodo 19/5/2016 al 19/5/2017, se ha acreditado que el actor hizo uso de feriado legal, por lo que dicho periodo no se le adeuda. Además, hay dos días adicionales que deben ser considerados para el feriado proporcional.

A su vez, en el periodo, 19/5/2017 al 23/3/2018 (308 días), corresponden 12.65 días de feriado legal. Que entonces, en el referido periodo, se ha acreditado que el actor hizo uso de 6 días de permiso con goce de remuneraciones, que se deben asimilar a las vacaciones, más dos días hábiles adicionales de feriado legal, es decir, 8 días. De esta manera, se adeudan a la actora 4.65 días de feriado proporcional.

Que en base a una remuneración mensual de \$3.119.064 pesos mensuales, la suma adeudada por este concepto arriba a **\$676.836 pesos.-**



Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 63, 73, 162, 163, 168, 172, 173, 446 y siguientes; artículos 1 y 11 de la Ley 18.834; artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, **SE DECLARA:**

I.- Que **se rechazan** las excepciones de incompetencia absoluta del tribunal, falta de legitimación activa del demandante, y falta de legitimación pasiva del demandado intentadas por la **SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, por los argumentos indicados en el Considerando Séptimo de esta sentencia.

II.- Que **se acoge** la demanda declarativa de relación laboral intentada por la demandante **MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ**, en contra de **FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo de esta sentencia, y se declara que hay relación laboral entre las partes desde el 19/5/2014 al 23/3/2018.

III.- Que **se acoge** la demanda de despido injustificado intentada por la demandante **MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ**, en contra de **FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo de esta sentencia, y se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:



- indemnización sustitutiva del aviso previo, por la suma de **90 UF**

- indemnización por años de servicio, por la suma de **360 UF**
- recargo legal del 50% de la indemnización por años de servicio, por la suma de **180 UF**.

IV. Que se acoge parcialmente la demanda de cobro de prestaciones intentada por la demandante **MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ**, en contra de **FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo de esta sentencia, y se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

- Saldo de feriado proporcional, por la suma de **\$676.836 pesos.-**
- cotizaciones previsionales, y de salud, por todo el periodo trabajado, a saber, desde el 19/5/2014 al 23/3/2018, en base a una remuneración mensual de \$3.119.064 pesos mensuales.

V. Que se rechaza la demanda de nulidad del despido intentada por la demandante **MARGARITA DEL CARMEN PEÑA RAMIREZ**, en contra de **FISCO DE CHILE-SUBSECRETARÍA (MINISTERIO) DE HACIENDA**, RUT N° 61.806.000-4, persona jurídica de derecho público representada legalmente por doña **María Eugenia Manaud Tapia**, por los argumentos indicados en el Considerando Octavo de esta sentencia.

VI. Que se rechaza la petición de pagar cotizaciones de cesantía



por todo el periodo trabajado, al no estar afiliada la actora a la AFC CHILE S.A.

VII.- Que las sumas ordenadas pagar, se reajustarán y devengará intereses, en la forma dispuesta en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

VIII.- Que no se condena en costas a la demandada, por no haber sido totalmente vencida.

IX.- Devuélvanse los documentos acompañados, previo registro.

X.- Ejecutoriada que esté la presente sentencia, cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, para su ejecución.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: 0 – 3477 - 2018

RUC: 18 – 4 – 0108652 - 4

Dictada por don **RAMÓN DANILO BARRÍA CÁRCAMO**, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.



PRIMER JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO
SANTIAGO

En Santiago, a treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve se notificó la presente resolución por el estado diario.

